



UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

TRABAJO FIN DE ESTUDIOS

Título

La responsabilidad penal del menor

Autor/es

SARA OLARTE RUIZ

Director/es

SERGIO PÉREZ GONZÁLEZ

Facultad

Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja

Titulación

Máster Universitario en Acceso a la Abogacía

Departamento

DERECHO

Curso académico

2017-18



La responsabilidad penal del menor, de SARA OLARTE RUIZ
(publicada por la Universidad de La Rioja) se difunde bajo una Licencia Creative
Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported.
Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden solicitarse a los
titulares del copyright.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
MÁSTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA

LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR

SARA OLARTE RUIZ

TUTOR: SERGIO PÉREZ GONZÁLEZ



**UNIVERSIDAD
DE LA RIOJA**

LOGROÑO
CURSO ACADÉMICO 2017-2018

Resumen: En la investigación se aborda un estudio acerca de la Responsabilidad Penal del Menor, comenzando con el análisis de una evolución legislativa desde las fuentes normativas más primitivas hasta la legislación codificada más reciente en España. Se destaca una detallada evolución de los Códigos Penales de los siglos XIX y XX, siendo estos los que marcan las bases que sirvieron para la elaboración del Código Penal vigente en la actualidad, así como de la Ley específica de menores. Posteriormente, tras realizar una pequeña introducción del menor como sujeto de responsabilidad penal dentro del Derecho Penal español, se procede a hacer un análisis más profundo de Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, centrándonos en los diversos estadios de responsabilidad dependientes de la edad, en las reformas que dicha ley ha sufrido y en las medidas que dispone de aplicación a los menores infractores.

Summary: The research addresses a study on the Criminal Responsibility of Juveniles, beginning with the analysis of a legislative development; from the most primitive sources of law, to the most recent codified legislation in Spain. It highlights a detailed evolution of the Penal Codes of the nineteenth and twentieth centuries, these being the ones that laid the foundations for the elaboration of the Penal Code currently in force; as well as the specific Law for the protection of minors. Subsequently, after a small introduction of the child as a subject of criminal responsibility within the Spanish Criminal Law, we proceed to make a deeper analysis of the Law Regulating the Criminal Responsibility of Juveniles, focusing on the different stages of responsibility dependent on age, on the modifications that the aforementioned law has undergone, and on the implementing measures that apply to the juvenile offenders.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
1. ANTECEDENTES NORMATIVOS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR	3
1.1. Normativa anterior al Estado de Derecho	4
1.2. Derecho positivo español en el Estado de Derecho	10
1.2.1. <i>Códigos Penales del siglo XIX y el criterio del discernimiento</i>	10
1.2.2. <i>Códigos Penales del siglo XX y el criterio cronológico o biológico</i>	12
2. EL MENOR COMO SUJETO RESPONSABLE EN LA ACTUALIDAD	19
3. LA VIGENTE NORMATIVA SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR	24
3.1. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (LORRPM)	25
3.1.1. <i>Ámbito subjetivo</i>	29
3.1.2. <i>Ámbito objetivo</i>	35
3.2. Reformas legislativas	37
3.2.1. <i>Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre</i>	38
3.2.2. <i>Ley Orgánica 9/2000, de 22 de diciembre y Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre</i>	40
3.2.3. <i>Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre</i>	41
3.2.4. <i>Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre</i>	42
3.3. Medidas como consecuencias a la responsabilidad penal del menor	45
CONCLUSIONES	51
BIBLIOGRAFÍA	56
REFERENCIAS NORMATIVAS	59
a) Legislación actual	59
b) Normativa histórica citada	60

INTRODUCCIÓN

La responsabilidad penal del menor ha sido una materia que, durante mucho tiempo, no ha contado con un tratamiento jurídico debido a la inexistencia de un Derecho Penal forma. A los menores se les aplicaba el mismo sistema de castigos que a los adultos cuando cometían infracciones, quedando desprotegidos en cuanto a derechos y sufriendo brutales castigos. Sin embargo, con el avance de las sociedades, se ha creado un auténtico Derecho Penal exclusivo para los menores, determinando la edad a partir de la cual deberán responder penalmente y las medidas que les deberán ser aplicadas, adecuado, en toda su extensión, a la especial situación de este colectivo y siendo más benévolo, reconociéndoles derechos, garantías y deberes.

El objeto de este trabajo es el estudio del modelo jurídico del tratamiento punitivo de los menores infractores, especialmente la regulación actual sobre la responsabilidad penal de dichos sujetos atendiendo a su edad. En el primer capítulo se han plasmado los antecedentes normativos sobre la penalidad de los menores desde los usos y costumbres de las primeras civilizaciones hasta la legislación actual en España. Con el capítulo segundo se trata de encuadrar al menor en la vigente Teoría General del Delito, pero teniendo en cuenta las especialidades de dichos sujetos, permitiendo ello, un tratamiento jurídico excluyente o atenuante. Y, por último, el tercer capítulo aborda la responsabilidad penal de los menores en la actualidad en virtud de la regulación en el Código Penal y en la Ley de Regulación de la Responsabilidad Penal de los Menores. Ambas tratan de implantar al menor un Derecho amparado en el principio de superior interés del menor, siendo este el objetivo primordial. En este apartado se detalla lo referente al ámbito objetivo y subjetivo, encuadrando en varios estadios de edades la responsabilidad del menor. Además, se destacan las reformas que la Ley ha sufrido, las cuales han terminado por cambiar el sentido original de la Ley olvidando el interés supremo del menor; y, también, las medidas aplicables a los menores, que ya no tienen un fin retributivo como las penas en el Derecho Penal común, sino reeducativo y de reinserción, tratando de evitar un aumento de la delincuencia juvenil. Pese a ello, como veremos, las

reformas han aplicado medidas más duras a determinados delitos, siendo ello la causa de un retroceso en cuanto a la protección de los menores.

El estudio de la responsabilidad penal de los menores se remonta a tiempos pasados, sin embargo, en España, se toma realmente en serio con la llegada de la Codificación y la elaboración de los Códigos Penales de los siglos XIX al XXI, que tratan de conseguir una regulación definitiva y específica sobre dicha materia. Pese a ello, no fue realmente hasta el año 2000 cuando se elaboró la actual Ley de Regulación de la Responsabilidad Penal de los Menores. En ese mismo año, se dio un fuerte alarmismo social por aislados actos de grave delincuencia juvenil, lo cual motivó una serie de continuas reformas. Todo ello, tanto los intentos por elaborar una normativa estable como la desconfianza de la sociedad por la eficacia de la Ley, hizo que se diera una fuerte inseguridad legislativa y surgiera gran cantidad de doctrina acerca de la responsabilidad penal del menor, sin embargo, pasada esta época de vaivenes legislativos, tras la última reforma sucedida en 2006, parece haberse alcanzado cierto consenso.

Por último, se exponen una serie de conclusiones, teniendo en cuenta lo tratado a lo largo del trabajo y en base a toda la doctrina y regulación normativa estudiada, las cuales nos sirven de valoración final respecto al tratamiento de la responsabilidad del menor, sobre todo en la actualidad. En ellas, se atiende, sobre todo, a la evolución que ha sufrido la actual Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores del año 2000 en cuanto a las reformas que ha sufrido desde su aprobación, resultando de las mismas un endurecimiento de una Ley originaria que pretendía alzar, ante cualquier situación, el principio de interés superior de los menores, viéndose, actualmente este principio desplazado en casos de comisión de delitos graves cometidos por dichos sujetos.

1. ANTECEDENTES NORMATIVOS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR

En este apartado se va a hacer un análisis sobre cómo se ha tratado a lo largo de la historia la responsabilidad penal de los menores en las principales legislaciones que nos han precedido y, de algún modo, han forjado un Derecho Penal especial dedicado exclusivamente a estos sujetos. La responsabilidad penal del menor ha sido una regulación marcada por vaivenes legislativos que lejos se han encontrado de hacer fijo un criterio determinado. Es por ello que se hace complicada la búsqueda de un fundamento jurídico fijo y constante que desde tiempos pasados regule dicha materia. Con el paso del tiempo, la condición jurídica de la responsabilidad penal del menor ha ido modulándose, pero, si bien es cierto, existen escasas fuentes jurídicas acerca de este tema.

La escasez de fuentes jurídicas que han configurado la edad de responsabilidad penal se debe a que en las civilizaciones más antiguas no existía el Derecho Penal, sino un sistema de reacciones contra ciertos comportamientos basado en los usos y costumbres. En él, la responsabilidad se aplicaba a los sujetos, con independencia de su edad, pudiendo ser reclamado todo acto ilícito, sin tener en cuenta otras circunstancias (culpa, caso fortuito, minoría de edad, etc.). Por ello, los menores fueron imputados por el mismo sistema de responsabilidad que los adultos hasta el siglo XVII, siendo beneficiados, solo a veces, por una suavización del régimen. El tratamiento jurídico que se les aplicaba dependía de la normativa de cada época y pueblo, regulando responsabilidades diferentes. Finalmente, no ha sido hasta el siglo XIX, cuando se implantó la minoría de edad como exención o atenuante de la responsabilidad¹.

Es por todo ello, que nuestra sociedad necesita un Derecho Penal, tanto de adultos como de menores, pero, en el caso de los segundos debe estar limitado a intervenciones rigurosas y dotadas de racionalidad que no eviten la penalización del menor, sino que, de forma más benévola, los menores sean

¹ Cfr. GRANADO PACHÓN, S.J., *El menor infractor: evolución jurídica y mitos del tratamiento jurídico-penal actual*, Tesis defendida en la Universidad de Huelva, 2016, pp. 1-2.

receptores de un reproche social que incida positivamente en la formación de su personalidad².

Seguidamente se van a destacar los aspectos más importantes de cada tiempo referentes a la responsabilidad de menores, desde la escasez de fuentes de las primeras civilizaciones, hasta la regulación actual en el Código Penal español. Se va a poder observar una evolución de la sociedad, alcanzando una nueva concepción del menor como ser humano con derechos y autonomía, el cual no debe ser penado como un adulto, sino según sus circunstancias y gozando de una protección especial.

1.1. Normativa anterior al Estado de Derecho

En las civilizaciones primitivas, hasta la elaboración de los primeros textos, el derecho o las reglas de la sociedad eran reguladas conforme a los usos o costumbres del lugar, implantando la justicia doméstica, donde el superior familiar (padre), imponía decisiones a sus sometidos (el resto de la familia, sobre todo, a los hijos). Aquel tenía facultades ilimitadas sobre los menores, quienes eran de su propiedad, y podía ejercitarlas a su voluntad. Además, los menores, eran considerados un objeto por la debilidad y escasa utilidad social, pudiendo ser entregados para la reparación del daño o respondiendo por delitos cometidos por familiares³.

En esta época, surgió en Babilonia el *Código de Hammurabi* de 1750 a.C.⁴, cuya finalidad era establecer cierta equidad entre sus súbditos, y, aunque el sistema patriarcal seguía primando, el padre perdió el derecho a decidir sobre la vida o a la muerte de sus súbditos. De este texto cabe destacar la *Ley del Talión*⁵, más conocida como “ojo por ojo, y diente por diente”, regla que también se

² Cfr. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, F., *La jurisdicción de menores en España (pasado, presente y futuro)*, Tesis defendida en la Universidad Complutense de Madrid, 1996, pp. 23-25.

³ Cfr. GRANADO PACHÓN, S.J., *El menor infractor: evolución jurídica y mitos del tratamiento jurídico-penal actual*, cit., pp. 18-21.

⁴ Código de Hammurabi de 1750 a.C., (Disponible en: <http://www.ataun.net/BIBLIOTECAGRATUITA/Ci%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/An%C3%B3nimo/C%C3%B3digo%20de%20Hammurabi.pdf>; última consulta: agosto 2017).

⁵ La Ley del Talión se refiere a un principio jurídico de justicia retributiva o recíproca donde la norma imponía un castigo que se identificaba con el delito cometido. De este modo, no se habla de una pena equivalente, sino de una pena idéntica.

aplicaba a los menores, aunque de una manera atenuada en edades muy tempranas. También cabe destacar que, más adelante, en el siglo XII, las *Leyes Asirias Medias*⁶ regularon diferencias en asuntos civiles según la edad⁷.

En la época prerromana, las fuentes de derecho fueron muy escasas y únicamente se puede deducir que se aplicó la justicia doméstica. Lo mismo ocurría en Grecia, donde la falta de fuentes ha obligado a recurrir a obras de poetas. Las primeras disposiciones punitivas fueron las del legislador Dracón de las que se desprendía que los menores sufrían las mismas penas que los adultos siendo tratados con gran crueldad. Si bien es cierto que, con el avance de los tiempos, Platón y Aristóteles defendieron que la minoría de edad era una situación psíquica especial que disminuía la culpabilidad, aunque no la eximía⁸. Por el contrario, en Roma, la legislación fue más precisa, la *Ley de las XII Tablas* de 450 a.C.⁹ ya establecía límites adecuados al tipo de delito¹⁰. Además, fue la primera que distinguió tres estadios de responsabilidad: el infant (menores de 7 años) que carecía de capacidad de obrar y penal; el impúber (de 7 a 9 años y medio en mujeres o 10 años y medio en hombres) el cual sería penado si había obrado con discernimiento; y el minor (de 14 a 25 años) que tenía plena capacidad penal pero atenuada. Finalmente, tanto Grecia como Roma, abandonaron la justicia domestica impartiendo un sistema público regulado por la Ley y donde los hijos ya no eran propiedad de los padres, logrando una flexibilización de los castigos¹¹.

Centrándonos ya en España, el sistema punitivo constaba de normas y costumbres sin ningún razonamiento científico, hasta que, en la época medieval comienza a aparecer el interés por la protección de los niños y la regulación del derecho paterno. Con la reconquista, los Reyes Cristianos, dieron fueros o leyes

⁶ Leyes Asirias Medias del siglo XII (Disponibles en: <https://www.unizar.es/hant/Fuentes/leyasiria.html>; última consulta: septiembre 2017).

⁷ La Tablilla A, VI, 19-39 establecía los 10 años, como plena capacidad, para contraer matrimonial, posiblemente con base en un criterio de fertilidad.

⁸ Cfr. CÁMARA ARROYO, S., *Derecho Penal de Menores y Centros de Internamiento. Una Perspectiva Penitenciaria*, Tesis defendida en la Universidad de Alcalá de Henares, 2011, pp. 37-42.

⁹ Las XII Tablas del siglo V, (Disponibles en: http://ermoquisbert.tripod.com/dr/12t/12t_apunte.pdf; última consulta: septiembre 2017).

¹⁰ Mientras la pena capital se imponía al púber por la usurpación de pastos, al menor se le atenuaría en azotes o en la reparación del daño.

¹¹ Cfr. CÁMARA ARROYO, S., *Derecho Penal de Menores y Centros de Internamiento. Una Perspectiva Penitenciaria*, cit., 2011, pp. 44-47.

particulares a los pueblos que conquistaban permitiéndoles regular a su antojo. Sin embargo, el hecho de que cada pueblo tuviese sus propias normas originó una gran confusión, ocasionando diferentes regulaciones sobre una misma materia entre los diferentes pueblos.

En materia de responsabilidad penal del menor, estas regulaciones no dejaban de mostrar la esencia del derecho patriarcal, por ejemplo, el *Fuero de Calatayud* reconocía al padre la potestad de matar a los hijos, el de *Navarra* la de mutilarlos y el de *Plasencia* la de arrestarlos. Por lo contrario, también existían los que declaraban la responsabilidad modificada del menor en caso de que concurriesen circunstancias modificativas como el *Fuero de Salamanca* y el de *Teruel* que establecían prisión por deudas para menores de 12 años, pero con la atenuación del uso de cadenas en lugar de cepos, cormas o esposas; o el *Fuero de Ledesma* que señalaba que los menores de 9 años debían reparar el daño con 5 sueldos, mientras que a los mayores de dicha edad se les duplica. En cuanto a la edad límite, el *Fuero de Brihuega* establecía los 10 años como comienzo de la responsabilidad penal, el de *Abad de Oña* los 7 años, el de *San Miguel de Escalada* lo hacía en base al cambio de dientes y el *Libro de los Fueros de Castilla* en los 12 años¹². Ante este difuso panorama legal, no fueron pocos los intentos de unificación, así Alfonso X, promulgó el *Fuero Real* de 1255¹³, en el cual podíamos encontrar un sistema de responsabilidad individual por el cual no podrían los padres ser penados por delitos cometidos por sus hijos.

Por otro lado, *Las Partidas de Alfonso X* (1256-1265)¹⁴, sentaban las bases de la responsabilidad penal de los menores, señalando algunas excepciones para el menor de 14 años en hombres y 12 en mujeres, en delitos de lujuria¹⁵, así como para los menores de 10 años y medio en el resto de los delitos¹⁶. Se entendía que por debajo de esas edades no se tenía

¹² Cfr. CÁMARA ARROYO, S., *Derecho Penal de Menores y Centros de Internamiento. Una Perspectiva Penitenciaria*, cit., pp. 62-63.

¹³ Fuero Real de 1255, (Disponible en: <http://fama2.us.es/fde/opusculosLegalesT2.pdf>; última consulta: septiembre 2017).

¹⁴ Las Siete Partidas de Alfonso X, el Sabio, (Disponible en: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/las-siete-partidas-del-rey-don-alfonso-el-sabio-cotejadas-con-varios-codices-antiguos-por-la-real-academia-de-la-historia-tomo-3-partida-quarta-quinta-sexta-y-septima--0/html/01fb8a30-82b2-11df-acc7-002185ce6064_723.htm; última consulta: septiembre 2017).

¹⁵ Vid. Partida Séptima, Título I, Ley 9.

¹⁶ Vid. Partida Primera, Título 10, Ley 21.

capacidad de dolo, salvo que el Juez estimase lo contrario e impusiese un castigo, y que, en los delitos de lujuria, el menor obraba más por instinto que por inteligencia. Por otro lado, para los mayores de 10 años y medio y menores de 17 años¹⁷, o 25 años en la práctica, el Juez solía atenuar la pena, a pesar de no existir precepto legal que lo autorizase¹⁸. En el mismo sentido, el *Libro de las Costumbres De Tortosa* de 1279¹⁹ que toma la edad como una circunstancia modificativa de la responsabilidad, también dispone que hasta los 10 años y medio se entiende una irresponsabilidad total; desde los 10 años y medio hasta los 14 una responsabilidad en caso de que obrasen con el conocimiento necesario, y a partir de los 14 años una responsabilidad absoluta. A veces también se aplicaba este texto a los menores de 25 años ya que la capacidad jurídica se adquiría tras dicha edad²⁰.

En el siglo XIV, Alfonso XI tomó algunos preceptos establecidos por Alfonso X y en el *Ordenamiento de las Leyes de Alcalá de Henares* de 1348²¹ recogió la eximente de responsabilidad penal de 14 años para el delito de lujuria en varones y de 12 años en mujeres. Posteriormente, en las *Ordenanzas Reales de Castilla* (1385-1490)²², los Reyes Católicos exceptuaron a los menores de 12 años de las penas impuestas a los vagos. Similar contenido se reguló, en las *Leyes de Toro* de 1505²³ con fines de unificación y reforma de las leyes existentes, aunque en ellas quedan restos de la justicia doméstica²⁴.

El panorama que se vivía trataba de calmar las reivindicaciones de justicia carente de racionalidad y de proporcionalidad. La característica más importante

¹⁷ Vid. Partida Séptima, Título 31, Ley 8.

¹⁸ Cfr. VENTAS SASTRE, R., *La Minoría de Edad Penal*, Tesis defendida en la Universidad Complutense de Madrid, 2002, pp. 5-7.

¹⁹ Código de las Costumbres escritas de Tortosa de 1919, (Disponible en: http://simurg.bibliotecas.csic.es/viewer/image/CSIC000348216_V03/4/#head; última consulta: agosto 2017).

²⁰ Cfr. CÁMARA ARROYO, S., *Derecho Penal de Menores y Centros de Internamiento. Una Perspectiva Penitenciaria*, cit., p. 64.

²¹ Ordenamiento de las Cortes de Alcalá de Henares de 1348, (Disponible en: <http://fama2.us.es/fde/ocr/2004/ordenamientoDeAlcala.pdf>; última consulta: septiembre 2017).

²² Ordenanzas del Consejo Real de Castilla de 1385-1490, (Disponible en: <http://institucional.us.es/revistas/historia/07/07%20de%20dios.pdf>; última consulta: septiembre 2017).

²³ Leyes de Toro de 1505, (Disponible en: http://faculty.georgetown.edu/sallesrv/courses/SPAN-459/span459/pdfs/leyes_toro/leyes_96.pdf; última consulta: septiembre 2017).

²⁴ Cfr. CÁMARA ARROYO, S., *Derecho Penal de Menores y Centros de Internamiento. Una Perspectiva Penitenciaria*, cit., pp. 75-76.

del sistema jurídico penal español en los siglos XVI-XVIII era la arbitrariedad de los jueces ya que la interpretación judicial era muy elástica. Sin embargo, los procedimientos más crueles contra menores eran castigados por la Inquisición quien no respetaba la edad límite establecida en las normas, sino que consideraba a los menores capaces de delinquir a los 6 o 7 años. Además, si en el hecho concurrían circunstancias de especial malicia, se aplicaban las penas ordinarias a los hombres mayores de 14 años y mujeres mayores de 12 años²⁵. La Justicia Penal estaba gravemente viciada y la normativa se encontraba obsoleta con respecto a las necesidades penales y sociales, haciendo necesaria la elaboración de una Ley que los recogiese todo²⁶.

De esta época, se pueden encontrar normas que dan a los menores un tratamiento jurídico diferente que a los adultos, imponiéndoles sanciones más leves ante el mismo delito. La *Pragmática de 3 de mayo de 1586* de Felipe II ordenaba la pena de 6 años de galeras a los ladrones de entre 17 y 20 años lo cual fue endurecido por la *Pragmática de 23 de febrero de 1734* de Felipe V, la cual no llegó a aplicarse, que imponía la pena de muerte a los mayores de 17 años que hubieran robado en la Corte o a 5 leguas, atenuándose para los mayores de 15 y menores de 17, imponiéndoles un castigo de 200 azotes y 10 años de galeras. También cabe destacar, la *Pragmática de 12 de marzo de 1771* de Carlos III que reconocía, por primera vez, un tratamiento educativo a los menores con el fin de conseguir su reintegración dándoles, la oportunidad de trabajar en los presidios para alejarlos de la criminalidad y la *Pragmática-sanción de 19 de septiembre de 1783* que recogía las reglas para contener y castigar la vagancia y otros excesos, y, además, disponía que el menor de 16 años era inimputable y si fueran menores de 17 años, responderían los padres o tutores²⁷. Como podemos observar, en estos siglos, no se moduló el límite de edad, sino que se mantuvo el que oscilaba entre los 17 y 20 años, respetando siempre, como tope mínimo, los 10 años y medio.

²⁵ Cfr. GRANADO PACHÓN, S.J., *El menor infractor: evolución jurídica y mitos del tratamiento jurídico-penal actual*, cit., pp. 73-75.

²⁶ Cfr. VENTAS SASTRE, R., *La Minoría de Edad Penal*, cit., pp. 9 y 12.

²⁷ Cfr. VIDAL HERRERO, M. S., *Crítica al modelo de responsabilidad penal del menor en la ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores hacia un "modelo social de responsabilidad" del menor infractor*, Tesis defendida en la Universidad de Complutense de Madrid, 2015, pp. 56-62.

Carlos III comenzó a adoptar medidas protectoras cuya finalidad era la educación, obligando a los padres a educar a los menores y enseñarles un oficio, y, en caso de encontrarse incapacitados para ello, fueran destinados a hospicios o casas de misericordia o de enseñanza. Ello permitió escapar del reclutamiento militar y reemplazó la pena de muerte por la de privación de libertad en estos centros, sin embargo, muchas veces, se aplicaba de forma ilimitada hasta la corrección del menor²⁸. Además, se fijaron tres tramos de edad respecto a la responsabilidad penal: irresponsabilidad penal absoluta hasta los 7, 9 o 10 años, dependiendo del ordenamiento jurídico; desde las anteriores edades hasta los 14, 15 o 16 años, inimputabilidad si se probaba que no había actuado con discernimiento; y responsabilidad penal atenuada desde las edades anteriores a los 18 años²⁹. Carlos III llevó consigo la consecución de grandes logros en esta materia, de forma que hasta el Código Penal de 1822 no tuvo lugar, en España, ninguna norma relativa a menores infractores³⁰.

Entre los siglos XVIII y XIX, el sentimiento humanitario de la Ilustración llevó consigo un movimiento de urgente reforma y sistematización de las fuentes. Se consolidaron los principios que acabaron con el régimen jurídico anterior del menor e hizo surgir la Codificación en España y el Derecho Penal. En este sentido, ROUSSEAU defendió el valor absoluto de los niños en cuanto a su personalidad y autonomía como sujetos, presentando un desarrollo propio y particular³¹. A finales del siglo XIX, surgieron en Europa los primeros modelos tutelares, de protección o asistenciales, cuyos objetivos eran sustituir las penas por medidas educadoras, donde el contacto entre el menor y los mecanismos procesales fueran mínimos, y su ingreso en prisión quedara sustituido por la corrección familiar o pública. Pese a estas intenciones, la realidad era otra y los menores eran encarcelados en prisiones junto a adultos³².

²⁸ Cfr. GRANADO PACHÓN, S.J., *El menor infractor: evolución jurídica y mitos del tratamiento jurídico-penal actual*, cit., pp. 85-86.

²⁹ Cfr. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, F., *La jurisdicción de menores en España (pasado, presente y futuro)*, cit., p. 39.

³⁰ Cfr. VENTAS SASTRE, R., *La Minoría de Edad Penal*, cit., pp. 19-21.

³¹ Cfr. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, F., *La jurisdicción de menores en España (pasado, presente y futuro)*, cit., pp. 39.

³² Cfr. CÁMARA ARROYO, S., *Derecho Penal de Menores y Centros de Internamiento. Una Perspectiva Penitenciaria*, cit., pp. 291-292.

1.2. Derecho positivo español en el Estado de Derecho

A partir del siglo XIX se elaboraron en España sucesivos Códigos Penales (en adelante CP) inspirados en la doctrina clásica del Derecho, en el principio retribucionista, donde la pena era concebida como retribución moral y jurídica, impidiendo diferenciar al infractor menor del adulto. Además, en este siglo se aplicó el criterio biológico y el del discernimiento, no siendo hasta el CP de 1928 cuando se acogió el criterio biológico puro y se dejaron de aplicar penas retributivas, pasando a imponerse medidas³³. Esto se debió a que en el siglo XX se suscitó el estudio de la infancia y de la adolescencia infractora desde un trasfondo social y protector lo que permitió la sustitución de criterio³⁴.

1.2.1. Códigos Penales del siglo XIX y el criterio del discernimiento

Los CP del siglo XIX establecieron dos presunciones o criterios en materia de minoría de edad: la presunción *iuris et de iure* o criterio biológico, en una primera edad, que no admitía prueba en contrario, por lo que los menores de la edad fijada no podían delinquir; y la presunción *iuris tantum* o criterio del discernimiento, donde la responsabilidad, en una segunda edad, estaba condicionada a la concurrencia del mismo.

El primer CP español es de 1822³⁵ y es el resultado de la mezcla de tradición y progreso, como de la necesidad de abandonar las obsoletas Leyes penales debido a los cambios sociales y políticos. Partía de una presunción *iuris et de iure*, al determinar que el menor de 7 años estaba exento de responsabilidad ya que no tenían la voluntad de cometer un acto criminal³⁶; y una presunción *iuris tantum*, dependiendo de si había obrado con o sin discernimiento y malicia, entre los 7 y 17 años (art. 23). Si el menor obraba sin discernimiento ni malicia, no se le imponía pena alguna, aunque el juez podía imponerle una medida como el sometimiento a la corrección de sus familiares o de casas de corrección por el

³³ Cfr. GRANADO PACHÓN, S.J., *El menor infractor: evolución jurídica y mitos del tratamiento jurídico-penal actual*, cit., pp. 87-88.

³⁴ Cfr. VENTAS SASTRE, R., *La Minoría de Edad Penal*, cit., pp. 25-27.

³⁵ Código Penal español de 1822, (Disponible en: <http://www.cienciaspenales.net/files/2016/03/codigoPenal1822.pdf>; última consulta: julio 2017).

³⁶ Cfr. CÁMARA ARROYO, S., *Derecho Penal de Menores y Centros de Internamiento. Una Perspectiva Penitenciaria*, cit., p. 221.

tiempo que fuera conveniente, siempre que no excediese los 20 años del menor (art. 24). En cambio, si obró con discernimiento y malicia se le impondría una pena atenuada de la cuarta parte a la mitad de la pena ordinaria (art. 25), la cual en ningún caso podía ser la pena de muerte, trabajos perpetuos, deportación, presidio, obras públicas, infamia o destierro (arts. 64 y 65). Finalmente, para los sujetos mayores de 17 años, operaba plena responsabilidad³⁷.

Este CP se vio envuelto en vaivenes políticos lo que conllevó a su desaparición, aunque marcó las corrientes de los siguientes. La reacción absolutista, hizo surgir la necesidad de un nuevo código, sin embargo, ninguno de los tres Proyectos de 1830, 1831 y 1834 siguientes surtieron efecto. No regularon el discernimiento como criterio determinante en una segunda etapa, sino que solo hicieron referencia a los 10 años y medio como límite eximente de responsabilidad³⁸ y también dispusieron algunas atenuaciones³⁹⁴⁰.

No existió un nuevo texto punitivo hasta la elaboración del CP de 1848⁴¹, volviendo al régimen de los *Fueros y Las Partidas*. Consideraba a los menores de 9 años irresponsables penalmente, equiparándolos al loco o al demente mediante una presunción iuris et de iure y otorgaba el juicio del discernimiento a los mayores de 9 y menores 15 años, señalando que, en caso de existir discernimiento, se aplicaba una pena inferior en dos grados, pero, si no se estimaba discernimiento, se consideraba al menor irresponsable (art. 8). Además, introducía un periodo de responsabilidad atenuada desde los 15 a los 18 años, resultando de aplicación la pena inmediatamente inferior a la correspondiente, impidiendo imponer la pena de muerte a un menor de 18 años (art. 9). Por lo tanto, a partir de los 18 años, el menor era plenamente responsable. Sin embargo, este Código, a diferencia del anterior, no reguló la medida para supuestos en que la familia no podrán educar a los menores⁴².

³⁷ Cfr. GRANADO PACHÓN, S.J., *El menor infractor: evolución jurídica y mitos del tratamiento jurídico-penal actual*, cit., pp. 89-91.

³⁸ Vid. Artículo 35 del Proyecto de 1830, Artículo 4 del Proyecto de 1831 y Artículo 15 del Proyecto de 1834

³⁹ Vid. Artículo 118 y 119 del Proyecto de 1831 y Artículo 31 del Proyecto de 1834.

⁴⁰ Cfr. VENTAS SASTRE, R., *La Minoría de Edad Penal*, cit., pp. 52-63.

⁴¹ Código Penal español de 1848, (Disponible en: <http://fama2.us.es/fde/codigoPenal1848.pdf>; última consulta: julio 2017).

⁴² Cfr. GRANADO PACHÓN, S.J., *El menor infractor: evolución jurídica y mitos del tratamiento jurídico-penal actual*, cit., pp. 91-93.

La falta de adecuación entre la Constitución liberal de 1869⁴³ y el CP hizo necesario una reforma en aras de una armonización. De ahí surgió el CP de 1870⁴⁴, del cual cabe destacar que eliminó las penas para los menores, por lo que se le denominaba “el Código de las libertades”. Respecto a la edad penal, mantenía los mismos tramos que el CP anterior, pero preveía la entrega de menor a su familia para su corrección y educación, o, a falta de persona idónea, a un establecimiento adecuado⁴⁵. En cuanto a las medidas, no dejó al arbitrio del Juez la posibilidad de adoptarlas, sino que las reguló taxativamente y por tiempo determinado, pese a ello, siguió existiendo cierta arbitrariedad⁴⁶.

Posteriormente surgieron los Proyectos de 1880, de 1882 y de 1884 que pretendían una mejora y simplificación del sistema de penas, consiguiendo adaptarlo a la Constitución de 1876⁴⁷. El primero reguló en los arts. 8.3 y 9.2 de la misma forma que el CP de 1870; el segundo, en el art. 17.2 y 3, dispuso la eximente siguiendo el CP de 1848, mientras que el art. 18.2 innovó en atenuantes elevando a 20 años el tope máximo de minoría de edad, y, el tercero codificó las eximentes en el art. 31.4 y 5, las atenuantes en el art. 33.2 y mantuvo el límite de exclusión de responsabilidad como el CP de 1848, mientras que impuso el criterio del discernimiento para el mayor de 9 y menor de 15 años dejando al arbitrio del Juez la determinación del internamiento⁴⁸.

1.2.2. Códigos Penales del siglo XX y el criterio cronológico o biológico

El criterio del discernimiento provocó una gran inseguridad jurídica debido a la complejidad de tal concepto, dando lugar a distintas interpretaciones impidiendo una uniformidad. El estudio de este criterio requería ahondar en la realidad psíquica del menor siendo difícil por el desconocimiento de las ciencias

⁴³ Constitución democrática española de 1869, (Disponible en: <http://www.cepc.gob.es/docs/constituciones-espa/1869.pdf?sfvrsn=4>; última consulta: agosto 2017).

⁴⁴ Código Penal español de 1870 (Disponible en: https://sirio.ua.es/libros/BDerecho/codigo_penal/index.htm; última consulta: julio 2017).

⁴⁵ Vid. Artículos 8, 9.2 y 86.2.

⁴⁶ Cfr. VENTAS SASTRE, R., *La Minoría de Edad Penal*, cit., pp. 89-90.

⁴⁷ Constitución española de 1876, (Disponible en: <http://www.cepc.gob.es/docs/constituciones-espa/1876.pdf?sfvrsn=4>; última consulta: agosto 2017).

⁴⁸ Cfr. VENTAS SASTRE, R., *La Minoría de Edad Penal*, cit., pp. 98-105.

psicológicas y psiquiátricas. Por ello, no se sostuvo y fue suprimido por las críticas de la doctrina científica y las nuevas orientaciones del Derecho Penal de menores. Finalmente, en el siglo XX se suprimió definitivamente el criterio del discernimiento siendo sustituido por el criterio biológico o cronológico puro, basado en la determinación de una edad fija.

La primera regulación de este siglo tuvo lugar con el Proyecto de 1927 aunque no reguló la minoría de edad, lo que fue subsanado, incluyendo entre los arts. 55 y 56 un precepto en el que se fijó que sería irresponsable el menor de 16 años que no obró con discernimiento⁴⁹. Pero no fue hasta 1928 cuando se elaboró el primer CP⁵⁰ donde se dispuso que estaban exentos de responsabilidad los menores de 9 años, debiendo ser entregados a su familia para educarlos. También estaban exentos los mayores de 9 años y menores de 16 siempre que no hubieran obrado con discernimiento, siendo el Juez quien debía decidir si castigarles con penas, estimando que habían actuado con discernimiento, o declararles irresponsables, en caso de no apreciarlo⁵¹. Como atenuantes, declaraba que al mayor de 16 y menor de 18 años se le podría imponer la pena inferior en uno o dos grados (art. 65). Sin embargo, una vez alcanzados los 18 años, el sujeto sería plenamente responsable, siempre que no fueran de aplicación eximentes o atenuantes⁵².

Este Código supuso grandes avances, sobre todo, la elevación a 16 años de la edad penal, aunque, sí es cierto, que dichas modificaciones no operaron de modo general y absoluto, siendo ello solventado en el CP posterior. Con el retorno de la República se elabora el CP de 1932⁵³, similar al de 1870, pero incorporando las exigencias de la Constitución republicana y suprimiendo las incompatibilidades. Mantenía el art. 8.2 respecto a la exención de responsabilidad en 16 años, y el art. 9.2 en virtud de la atenuante en uno o dos grados para los menores de entre 16 y 18 años. Este texto acaba definitivamente

⁴⁹ Cfr. VENTAS SASTRE, R., *La Minoría de Edad Penal*, cit., pp. 138-140.

⁵⁰ Código Penal español de 1928 (Disponible en: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1928/257/A01450-01526.pdf>; última consulta: julio 2017).

⁵¹ Cfr. DE LA ROSA GUTIÉRREZ, G., "Imputabilidad y edad penal", en *BuscaLegis*, 2007, p. 11.

⁵² Cfr. CAMPOS SÁNCHEZ, M., "Incidencia del nuevo Código Penal en la legislación de menores", en *Revista Jurídica de la Región de Murcia*, 24, 1997, p. 99.

⁵³ Código Penal español de 1932, (Disponible en: <https://es.scribd.com/document/235086176/Codigo-penal-1932-pdf>; última consulta: julio 2017).

con el sistema de discernimiento e imponía los 16 años como límite de la minoría de edad penal, por debajo de los que no se exigía ninguna prueba de discernimiento y se excluía toda responsabilidad. A los mayores de 16 años se les consideraba responsable penalmente, aunque con un límite reducido, y se abolió la pena de muerte en cualquier supuesto⁵⁴.

En cuanto a las sanciones, los Tribunales impondrían medidas, en lugar de penas, abandonando definitivamente la concepción retributiva. Ello se debe a que, tras la Segunda Guerra Mundial, los modelos tutelares se ven desplazados por la implantación de un modelo de bienestar, con una perspectiva sociológica y reeducadora de los menores infractores, introduciendo sistemas de mediación, compensación y reparación del daño, y declarando la aplicación de la pena de internamiento solo en los casos más graves⁵⁵.

Más adelante, el CP de 1932 fue sustituido por el CP de 1944⁵⁶, texto armonizado con los propósitos políticos del Gobierno franquista. Este Código supuso una mayor severidad, llegando incluso a reintroducir la pena de muerte, aunque respetó que a los menores se les impondrían medidas y no penas. También mantuvo el límite de exención de 16 años del art. 8.2 y la responsabilidad atenuada a los menores de entre 16 y 18 años en uno o dos grados o sustituirla por internamiento en institución de reforma hasta su corrección⁵⁷. Por lo tanto, la introducción del criterio biológico hace que el no haber cumplido los 16 años excluya de responsabilidad criminal, aunque el desarrollo de actividades intelectivas y volitivas haría pensar que comprendía la ilicitud de sus actos, dándose, por lo tanto, una presunción iuris et de iure. Pero esto no implicaba que el infractor sufriera las consecuencias del delito, sino que éstas tendrían como objetivo la educación y la inserción social⁵⁸.

⁵⁴ Cfr. VENTAS SASTRE, R., *La Minoría de Edad Penal*, cit., pp. 149-159.

⁵⁵ Cfr. CÁMARA ARROYO, S., *Derecho Penal de Menores y Centros de Internamiento. Una Perspectiva Penitenciaria*, cit., pp. 398-400.

⁵⁶ Código Penal español de 1944, (Disponible en: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1945/013/A00427-00472.pdf>; última consulta: julio 2017).

⁵⁷ Cfr. VENTAS SASTRE, R., *La Minoría de Edad Penal*, cit., pp. 197-200.

⁵⁸ Cfr. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, F., *La jurisdicción de menores en España (pasado, presente y futuro)*, cit., pp. 189-195.

Seguidamente, el nuevo CP de 1973⁵⁹, siguió manteniendo el criterio cronológico de que todo menor de 16 años era inimputable y carecía de toda responsabilidad penal, recogiendo la minoría en el art. 8 con el resto de eximentes⁶⁰. Este texto distinguía las mismas fases de responsabilidad penal: los menores de 16 años exentos de toda responsabilidad penal; los mayores de 16 a 18 años imputables, pero con atenuante en uno o dos grados de la pena y un internamiento en institución de reforma por tiempo indeterminado hasta conseguir la corrección⁶¹; y, por último, la de los mayores de 18 años que contaban con plena capacidad penal⁶².

El cambio de régimen político y la promulgación de la Constitución Española de 1978 (en adelante CE)⁶³, abrieron la vía hacia una monarquía constitucional democrática. Ello conllevó a la elaboración de diversas reformas penales para lograr una adaptación a las exigencias del nuevo régimen. La CE, recogió por primera vez en España, en un texto constitucional, los derechos y libertades del niño, protegiéndole como miembro de una familia, como persona y como sujeto de derechos y deberes y reconociéndole ciertas garantías educativas. Además, consagró el principio de prevención especial y el de legalidad, dispuso como fin de las medidas la reeducación y reinserción social y abolió la pena de muerte. También nos acercó al plano internacional, de forma que los arts. 10.2 y 39.4 señalan que dicha regulación se interpretará conforme a las normas y acuerdos internacionales, los cuales son: la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950, la Declaración Universal de los Derechos del Niño en 1959, el Convenio Internacional de la Haya de 1961 y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, sin olvidarnos que este último texto ha sido desarrollado en otros tres instrumentos, las Reglas de Beijing de 1985, las

⁵⁹ Código Penal español de 1973, (Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1973-1715>; última consulta: julio 2017).

⁶⁰ Cfr. JIMÉNEZ DÍAZ, M. J., "Algunas reflexiones sobre la responsabilidad penal de los menores", en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 17-19, 2015, p. 3.

⁶¹ Vid. Artículo 9.3 y 65.

⁶² Cfr. CÁMARA ARROYO, S., *Derecho Penal de Menores y Centros de Internamiento. Una Perspectiva Penitenciaria*, cit., pp. 410-413.

⁶³ Constitución española de 1978, (Disponible en: <https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf>; última consulta: agosto 2017).

Directrices de Riad de 1990 y las Reglas Mínimas Uniformes de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores de 1990⁶⁴.

Fruto de todo ello, en 1980 tuvo lugar un Proyecto totalmente nuevo, que redujo la edad de exención a 15 años, amparándose en que la capacidad psíquica se adquiría antes que en otros tiempos. Además, dispuso como atenuantes que entre los 15 y 18 años se aplicaría la pena inferior en grado teniendo en cuenta las circunstancias del menor y del delito (arts. 27.3 y 80) y se podría sustituir la pena de prisión impuesta al mayor de 15 años y menor de 21 por el internamiento en un centro hasta conseguir su corrección, pero sin poder exceder de 10 años (art. 148). Tres años más tarde, se elaboró el Proyecto de 1983, cuyo art. 22, elevaba la edad a los 18 años, pero no señaló distintos segmentos de edades. Se piensa que esto se debió a la intención de promulgar una Ley que regulase especialmente la responsabilidad penal del menor como así lo exigía la Disposición Final Segunda, siendo el primer intento de elaborar un Derecho Penal de menores. Además, también incluía en su art. 99 que, al infractor mayor de 18 años y menor de 21, el Tribunal podría sustituirle la pena de prisión por el internamiento en un centro reeducador por un tiempo no superior a la pena, sin que pueda exceder de 4 años (art. 87.2). En 1992 se creó otro Proyecto que señalaba como irresponsables penalmente a los menores de 16 años (art. 19.3) y recogía la atenuante por ser menor de 18 años (art. 20.3)⁶⁵.

Y, finalmente, tuvo lugar el Proyecto de 1994, el cual no entró en vigor por no tener en cuenta el art. 20 que exigía, de forma previa a la elevación de la edad penal a 18 años, que se aprobase una Ley especial. Más adelante, este Proyecto se convirtió en el vigente CP de 1995⁶⁶, un texto punitivo, que es fruto de todas las reformas y que se encuentra adaptado a los nuevos valores constitucionales. Reconoce al menor una responsabilidad que le hace dueño de sus actos, pero no aplicándole un Derecho Penal de adultos, sino uno específico. Se ha superado la calificación del menor como un sujeto incapaz, con déficit de normalidad y carente de las capacidades, y se le han reconocido derechos,

⁶⁴ Cfr. GRANADO PACHÓN, S.J., *El menor infractor: evolución jurídica y mitos del tratamiento jurídico-penal actual*, cit., pp. 215, 298 y 419.

⁶⁵ Cfr. VENTAS SASTRE, R., *La Minoría de Edad Penal*, cit., pp. 173-191, 191-197 y 207.

⁶⁶ Código Penal de 1995: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, (Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444>; última consulta: septiembre 2017).

deberes y garantías. Este Código, acude al criterio cronológico o biológico puro para declarar la imputabilidad, señalando un límite fijo de edad a partir del cual se considerará la responsabilidad penal, y por debajo del cual no existe responsabilidad alguna⁶⁷.

En dichas épocas también se elaboró normativa competencial y procedimental como la Ley de Tribunales Tutelares de Menores de 13 de diciembre de 1940 y la Ley de Tribunales Tutelares de Menores de 11 de junio de 1948⁶⁸. Sin embargo, la Sentencia del Tribunal Constitucional 36/1991 de 14 de febrero declaró inconstitucional el art. 15⁶⁹ de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores de 1948 por vulnerar principios fundamentales y constitucionales. Fue como consecuencia de esta sentencia, que se dictó la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la Ley reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores⁷⁰, precedente de la Ley actual en dicha materia⁷¹.

Cabe destacar que, en 1995, CANTARERO, en su obra “Los menores y el Derecho Penal”, hace un pequeño análisis, desde una vertiente más procesal, tanto de la Ley Orgánica 4/1992 como del Proyecto de Código Penal de 1994 y Anteproyecto de Ley Penal Juvenil y del Menor. En base a todo ello, considera que un tratamiento exclusivamente penal y retribucionista de los menores, sería una reacción injusta y poco coherente con los principios constitucionales, pero una inimputabilidad absoluta supondría justificar los comportamientos delictivos. Se posiciona a favor de un modelo de justicia penal, frente a uno educativo puro, por considerar, que éste traería una falta de garantías penales y procesales, así como cierta incoherencia, siendo esto lo que ha ocurrido en países donde ha sido aplicado, entendiendo que una legislación basada en derechos y garantías será más coherente que un derecho de asistencia y protección frente a un delito.

⁶⁷ Cfr. DE LA ROSA GUTIÉRREZ, G., “Imputabilidad y edad penal”, cit., pp. 12-13.

⁶⁸ La Ley de Tribunales Tutelares de Menores de 1948 únicamente reguló el procedimiento y las medidas a adoptar en materia de delitos y faltas cometidos por menores de 16 años.

⁶⁹ Dicho precepto regulaba el procedimiento de corrección y de reforma de menores, y señalaba que, en el procedimiento de corrección, las sesiones que los Tribunales Tutelares celebren no serán públicas y no se sujetará a las reglas procesales vigentes en las demás jurisdicciones.

⁷⁰ Esta Ley apostó por la protección y educación del menor, de carácter tutelar, pasando de un modelo paternalista, a uno más garantista. De ella se deducir que los menores de 12 años son irresponsables absolutamente, mientras que los infractores de 16 a 18 años eran responsables de acuerdo con la legislación penal de los menores.

⁷¹ Cfr. BLANCO BAREA, J.A., “Responsabilidad Penal del Menor: principios y medidas judiciales aplicables en el Derecho Penal español”, en *Revista de Estudios Jurídicos*, 8, 2008, p. 1.

Por lo tanto, defiende la conciliación en una legislación de justicia penal y un derecho reeducativo de menores, partiendo de presupuestos jurídico-penales y procesales acordes al Derecho Penal y Procesal más avanzado en derechos fundamentales reconocidos en la Constitución⁷².

Sentadas ya las bases normativas que han ido desarrollándose en el pasado, se va a proceder con un examen más profundo y actualizado de la responsabilidad penal de los menores. En primer lugar, se va a realizar un pequeño análisis de la clasificación de los menores en el Derecho Penal como sujetos activos en la comisión de un delito, para luego seguir con un estudio más detallado de la regulación vigente en la actualidad.

⁷² Cfr. CANTARERO, R., "Los menores y el Derecho Penal", en *Derecho Privado y Constitución*, 7, 1995, pp. 16, 18, 20-22 y 29-30.

2. EL MENOR COMO SUJETO RESPONSABLE EN LA ACTUALIDAD

Para hacer el correspondiente estudio sobre la responsabilidad penal de los menores, en primer lugar, resulta conveniente analizar el término “menor”. Desde el punto de vista gramatical, “menor” se refiere a toda persona que no tiene suficiente edad para disponer de sí ni de sus bienes, atendiendo a las disposiciones legales. Por lo tanto, la edad establece el límite o la diferencia entre mayores y menores de edad. Pero dicho límite no es único a nivel internacional, sino que difiere según los países, aunque en los últimos tiempos, se está tratando de alcanzar dicha unanimidad para fijar la mayoría de edad en los 18 años. Esto se ha visto positivizado en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989⁷³ señalando que se entiende por niño y niña todo ser humano menor de 18 años, salvo que la ley del país que le sea aplicable disponga una mayoría de edad diferente (art. 1).

Por otro lado, en términos jurídicos, se entiende la edad como el tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta el momento en que se computa o exige algo. De este modo, no solo determina si un sujeto es mayor o menor, sino también las consecuencias jurídicas. La capacidad jurídica se tiene por el hecho de ser persona, desde el nacimiento, por lo que la edad no afecta a este concepto, sin embargo, sí afecta a la capacidad de obrar, la cual no se adquiere hasta que se alcanza la mayoría de edad, cesando la necesidad de dependencia del menor respecto a otras personas. Es precisamente la falta de capacidad de obrar de los menores por sí mismos, la que hace que el Estado tenga la obligación de velar por satisfacer sus necesidades y de protegerlos de una forma especial ya que precisan una protección diferente, específica y superior.

La tarea de los países de fijar la edad mediante la cual se alcance la mayoría de edad no ha sido un asunto de fácil. SÁNCHEZ MARTÍNEZ declara que para la determinación de la mayoría de edad se ha tenido en cuenta la evolución de la inteligencia, la cual se desarrolla hasta los 18 años, alcanzando el máximo, a partir de la cual, se podrá tener más experiencia, pero no se podrá seguir

⁷³ Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, (Disponible en: <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx>; última consulta: octubre 2017).

incrementando la inteligencia. Se entiende que una persona es madura y autónoma cuando acepta las consecuencias de los actos, conoce el conocimiento, es responsable de su carácter y se realiza con libertad⁷⁴. En base a esto, España estableció, en el art. 19 del CP de 1995, la edad penal en 18 años, coincidiendo con la mayoría de edad civil.

Por todo ello, el concepto de “menor” corresponde al nivel de desarrollo alcanzado respecto a derechos humanos y sociales. Antiguamente, el menor era considerado un objeto propiedad exclusiva del *pater familias*, pero gracias al avance de las sociedades y el descubrimiento de la psicología, la pedagogía y la sociología, el menor ha alcanzado unos derechos que le hacen digno de protección. Por lo tanto, actualmente, es un sujeto de derecho, pudiendo gozar de los mismos derechos humanos que los adultos, lo que representa una ruptura importante con la situación anterior.

Además, y pese a la fijación de la edad penal en los 18 años, los menores viven en sociedad, se forman y evolucionan por la interrelación con el medio, siendo influidos por factores económicos, culturales, educativos, etc. Cuando alguno de estos factores falle o influya de forma negativa, el menor tendrá dificultades para construir su personalidad, lo que podrá ocasionar la formación de nuevos delincuentes. De esta forma, es más probable, que menores en situación de desprotección o de riesgo social, puedan cometer delitos en un futuro. En estos casos, la sociedad y el Estado actúan como controladores de las actitudes, implantando medidas preventivas frente a situaciones de riesgo y protegiendo al menor dirigiéndose a las familias, las escuelas, los pueblos, etc. Para que la delincuencia juvenil disminuya y se encauce la vida de los infractores, se deben elaborar leyes y programas que garanticen la protección social y jurídica de los menores, sobre todo, de los que no gozan de una protección familiar o han delinquido⁷⁵.

Como hemos visto el menor es un sujeto con derechos, pero no privado de cometer actos ilícitos cuando algo falla en la formación de su personalidad. Por ello, es importante hacer una referencia a cómo la “Teoría General del Delito” del

⁷⁴ Cfr. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, F., *La jurisdicción de menores en España (pasado, presente y futuro)*, cit., pp. 3-4.

⁷⁵ Ibid., pp. 3-4, 6-8, 10-11 y 13-16.

Derecho Penal común se aplica cuando hablamos de menores, cual es el tratamiento jurídico de éstos como responsables de un delito. Dicha teoría es la dogmática penal que ha estudiado la estructura jurídica del delito, qué se entiende por delito y las categorías que lo forman (tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad e imputabilidad). Merece hacer una breve referencia al concepto de cada una de ellas para poder entender cómo se aplican ante un sujeto menor de edad. Como escueta definición de cada una de ellas cabe decir que la tipicidad consiste en el encuadramiento de la conducta humana en el tipo penal de las leyes, la antijuridicidad es el desvalor que posee un hecho típico contrario al ordenamiento jurídico, la culpabilidad comprende una serie de circunstancias necesarias para imputar un hecho antijurídico a un sujeto, y, por último, la punibilidad que supone la imposición de una pena. Entre estas categorías se establece una relación escalonada en dicho orden, de manera que, si no se cumple alguna, será imposible que se dé la siguiente, quedando rota la cadena y, por lo tanto, tratándose de un supuesto irrelevante para el Derecho Penal.

De esta forma, cuando tengamos un supuesto típico y antijurídico, habrá que atribuirlo a su autor, declarándolo culpable y responsable, salvo que exista alguna causa de exclusión, las cuales impedirán que se le repute culpable, eximiendo al autor de cualquier tipo de responsabilidad penal. Atendiendo a ello, los menores tienen un régimen específico al contar con circunstancias especiales, debido a sus escasas posibilidades de ejercicio, a su dependencia y a su peculiar situación de evolución constante⁷⁶. Es por ello que existe delito siempre que el menor cometa un hecho típicamente antijurídico, pero no significa que tenga que ser penado, pues debido a su especial situación las disposiciones legales implantan un tratamiento jurídico diferente al de los adultos⁷⁷.

De todas las categorías del delito, para hablar de la responsabilidad de los menores merecen especial atención la culpabilidad y la imputabilidad, teniendo en cuenta que la segunda es un elemento de la primera. La culpabilidad consiste en la reprochabilidad personal de una conducta contraria a Derecho, pero este reproche no es absoluto, sino que dependerá de la imputabilidad. El proceso de

⁷⁶ Cfr. DE LA ROSA GUTIÉRREZ, G., "Imputabilidad y edad penal", cit., pp. 1-2.

⁷⁷ Cfr. VENTAS SASTRE, R., *La Minoría de Edad Penal*, cit., pp. 47-48.

menores se diferencia del de adultos en que, mientras en éste prima el automatismo y proporcionalidad donde se aplica la pena impuesta por el CP; en la legislación de menores, la infracción no determina proporcionalmente la consecuencia penal, sino que ésta viene determinada por la valoración del interés del menor, siendo la misma una medida socioeducativa con fines de reinserción⁷⁸. En segundo lugar, la imputabilidad, es un concepto más complejo, sobre todo, porque debe tener en cuenta una amplia variedad de circunstancias (dogmáticas, penales, prácticas, psiquiátricas, etc.). La imputabilidad es la capacidad cognitiva y volitiva de actuar conforme a Derecho, es decir, debe existir en el autor del delito una capacidad de conocimiento del injusto (capacidad cognitiva) y una facultad de actuar conforme a dicho conocimiento (capacidad volitiva). Parece ser que este término engloba la madurez psíquica y la capacidad del sujeto para motivarse, así como la edad o la salud mental, de modo que, si no se poseen las facultades psíquicas suficientes para poder ser motivado racionalmente, no podrá haber imputabilidad y, del mismo modo, tampoco habrá culpabilidad.

Nuestro Derecho Penal, parte de la presunción iuris tantum de la imputabilidad de las personas. Normalmente, la imputabilidad se presume, excepto en una serie de casos tasados en los que el CP establece que no existe responsabilidad criminal, entre los cuales se encuentran los menores de cierta edad⁷⁹. El CP de 1995 ha recogida en el art. 20 las causas generales que eximen de responsabilidad criminal y en el art. 19 que los menores de 18 años no serán responsables de acuerdo con el mismo, pero sí según la Ley de Responsabilidad Penal del Menor⁸⁰. Esto ha sido un gran avance en la intención del legislador por diferenciar la aplicación de eximentes, por ello, ha ubicado la eximente de minoría de edad, por primera vez, en un precepto separado de las eximentes generales, aunque ambos preceptos estén incluidos en el capítulo de las causas que eximen de responsabilidad criminal.

⁷⁸ Cfr. PANTOJA GARCÍA, F., “Unas notas sobre la imputabilidad de los menores y su tratamiento en la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores”, en *AFDUAM*, 15, 2011, pp. 308 y 310.

⁷⁹ Cfr. DE LA ROSA GUTIÉRREZ, G., “Imputabilidad y edad penal”, cit., pp. 2-7.

⁸⁰ Cfr. CARMONA SALGADO, C., “Algunas observaciones sobre la responsabilidad penal de los menores, a raíz de la Ley 5/2000, de 12 de enero”, en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 45, 2002, pp. 1-2.

En definitiva, las causas de inimputabilidad serán los casos en que el sujeto ha ejecutado una conducta típica y antijurídica, pero no resulta imputable ni responsable penalmente por no reunir los requisitos físicos y psíquicos que exige la Ley, es decir, no alcanza el límite de edad, o, a pesar de alcanzarlo, tiene falta de capacidad para conocer la antijuridicidad del hecho o falta de capacidad de voluntad para dirigir el comportamiento conforme a tal conocimiento⁸¹.

Finalmente, el art. 19 CP dispone que los menores de 18 años son inimputables de acuerdo con el CP, pero eso no significa que sean irresponsables totalmente ya que sí serán responsables atendiendo a la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. Sin embargo, si un menor de 14 años comete un delito, será totalmente inimputable desde el punto de vista penal, tanto del CP como de la Ley, eximiendo al menor de cualquier responsabilidad penal⁸². La tarea de establecer la barrera entre la imputabilidad y la inimputabilidad de un sujeto ha sido uno de los grandes problemas en materia de responsabilidad penal consecuencia de la corta edad, falta de capacidad de comprensión y de actuar de acuerdo a las normas, dando lugar a la inimputabilidad e irresponsabilidad de los menores, no pudiendo imponérsele las penas del CP sino que serán las autoridades administrativas quienes actúen en atención a las carencias educativas, familiares o sociales que manifieste.

Es el siguiente Capítulo, al que le corresponde un análisis más detallado sobre la regulación vigente acerca de la responsabilidad penal de los menores. En él, se va a exponer que tratamiento determina el CP actual a los menores, y como remite a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, la cual se encarga de regular todo lo correspondiente a la responsabilidad penal de los menores.

⁸¹ Cfr. DE LA ROSA GUTIÉRREZ, G., "Imputabilidad y edad penal", cit., pp. 7-8.

⁸² Cfr. NIETO MORALES, C., *Intervención con menores en conflicto con la ley*, Madrid, Dykinson, 2016, pp. 20-21.

3. LA VIGENTE NORMATIVA SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR

El Derecho Penal de menores en España está constituido por un conjunto de normas que regulan las consecuencias jurídicas que se le aplicarán a un menor de edad cuando cometa un delito tipificado en el CP o en la legislación específica⁸³. Como hemos visto, dicha regulación ha sido objeto de numerosas modificaciones a lo largo de los tiempos, desde los primeros usos y costumbres hasta la regulación actual. Finalmente ha sido el vigente CP de 1995 el que ha fijado dicha materia, pero, pese a ello, el problema de la regulación de la responsabilidad penal de los menores no quedaba resuelto al no haberse aprobado una Ley específica, haciéndose urgente y necesaria su elaboración⁸⁴.

La determinación del límite de edad se encuentra basada en criterios político-criminales, aunque también en criterios sociológicos como han hecho la mayoría de los ordenamientos jurídicos. Actualmente, se considera que la etapa de la adolescencia se ha prolongado, en cierta parte, por la ampliación de los períodos de formación obligatoria, hasta los 16 años. Además, las influencias internacionales, hacían ver la necesidad de elaborar un nuevo sistema legal más acorde con la normativa internacional. Se procedió a sustituir el modelo tutelar por otro especial, relativo a la responsabilidad de los menores, incluyendo garantías procedimentales y elaborando una serie de consecuencias jurídicas para alcanzar su reeducación y reinserción social⁸⁵. De esta forma, la Convención sobre los Derechos del Niño⁸⁶, en su art. 40, demanda una jurisdicción especializada, que enjuicie los hechos atendiendo, aparte del delito y su gravedad, a la edad y las circunstancias del menor, buscando garantizar los derechos de este⁸⁷.

⁸³ Cfr. NIETO MORALES, C., *Intervención con menores en conflicto con la ley*, cit., p. 9.

⁸⁴ Cfr. DE LA ROSA GUTIÉRREZ, G., "Imputabilidad y edad penal", cit., p. 14.

⁸⁵ Cfr. CARMONA SALGADO, C., "Legislación penal de menores en los sistemas jurídicos peruano y español. Un estudio comparativo", en *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 4, 2010, pp. 91-93.

⁸⁶ Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, (Disponible en: <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx>; última consulta: octubre 2017).

⁸⁷ Cfr. CANO PAÑOS, M. A., "¿Supresión, mantenimiento o reformulación del pensamiento educativo en el Derecho Penal juvenil?", en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 13, 2011, pp. 12-16.

Como antecedentes a la Ley específica de menores, además de destacar la LORCPJM, también cabe mencionar los intentos anteriores a su elaboración, el Anteproyecto de 27 de abril de 1995, el Anteproyecto de 30 de octubre de 1996, la Proposición de 29 de noviembre de 1996, el Anteproyecto de 30 de enero de 1997, el Anteproyecto de 1 de julio de 1997, y, finalmente, el Proyecto de 1998⁸⁸.

3.1. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (LORRPM)

A principios del siglo XXI, tras varios años de Anteproyectos y Proyectos, se aprobó la LORRPM⁸⁹, que representa una importante reforma en el ámbito del Derecho Penal de menores, ya que, por primera vez, un único texto legal regula todos los aspectos sustantivos, procesales y de ejecución en materia de responsabilidad penal de menores, intentando evitar reglamentaciones parciales o autonómicas que provocaran tratamientos diferentes entre los distintos territorios.

La aprobación de la LORRPM supuso la conjunción de la norma penal general y la norma especial. Esto permitió completar el sistema normativo sobre responsabilidad penal de los menores dispuesto por el CP de 1995, el cual adaptaba toda la legislación penal al sistema constitucional, con el objetivo de crear un sistema diferente de responsabilidad penal para los menores, con la intención de evitar la imposición de penas y estableciendo medidas⁹⁰.

Debido a la imposibilidad de que la Ley se aprobase simultáneamente con el CP, la Disposición Final Séptima del CP dejó en suspenso la entrada en vigor del art. 19 sobre la elevación de la edad penal a 18 años, hasta pasados 6 meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, pero se intentaron soluciones para evitar que a los menores de 18 años y mayores de 16 se les siguiesen aplicando, hasta la entrada en vigor, las normas previstas en el CP de

⁸⁸ Cfr. VIANA BALLESTER, C., “La responsabilidad penal del menor: naturaleza y principios informadores”, en *Revista Penal*, 13, 2004, pp. 157-159.

⁸⁹ Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, (Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-641>; última consulta: agosto 2017).

⁹⁰ Cfr. CÁMARA ARROYO, S., *Derecho Penal de Menores y Centros de Internamiento. Una Perspectiva Penitenciaria*, cit., pp. 455-457.

adultos⁹¹. Ante esta situación, la Disposición Derogatoria Única y la Disposición Transitoria Duodécima prorrogaron la vigencia de la regulación anterior, manteniendo hasta la entrada en vigor de la LORRPM, el régimen jurídico de la minoría de edad penal del CP de 1973, en base al cual el límite de edad penal eran los 16 años, por debajo del cual el sujeto era inimputable. Sin embargo, a los mayores de 16 y menores de 18 años, se les ha aplicado la atenuante de sustitución del internamiento por centros de reforma o de reducción de la pena en uno o dos grados (arts. 9.3 y 65 CP)⁹².

No es hasta el 13 de enero de 2001 cuando se derogaron todos los preceptos del CP de 1973, mediante la Disposición Final Quinta de la LORRPM, y se hizo entrar en vigor el art. 19 CP de 1995 que fijaba la edad de responsabilidad penal siguiendo el criterio cronológico o biológico puro. Dicho precepto establece en su primer párrafo que los menores de 18 años no serán responsables penalmente con arreglo a este CP. Pero para entender esto, hay que ponerlo en relación con el párrafo segundo, el cual dispone que el menor de 18 años que cometa un delito podrá ser responsable en virtud de la Ley que regule la responsabilidad penal del menor, en este caso, la LORRPM. Por lo tanto, este precepto no instaura la inimputabilidad de los menores de 18 años, sino que hace una remisión normativa a una Ley especial⁹³.

Es con esta Ley, aprobada el 12 de enero de 2000, cuando se implanta un modelo de responsabilidad o de justicia penal de menores. La LORRPM está “basada en principios de educación, de intervención mínima, de interés superior del menor, de flexibilidad en la elección y ejecución de las medidas y de reconocimiento de todas las garantías que se derivan del respeto a los derechos”⁹⁴. Tiene naturaleza jurídico-penal, regulando un régimen sustantivo, procesal y de ejecución con todas las garantías de la CE y la doctrina. La Exposición de Motivos declara que se trata de una Ley de “naturaleza formalmente penal pero materialmente sancionadora-educativa”⁹⁵ y que tiene un

⁹¹ Cfr. VENTAS SASTRE, R., *La Minoría de Edad Penal*, cit., pp. 208-242.

⁹² Cfr. JIMÉNEZ DÍAZ, M. J., “Menores y responsabilidad penal: el debate se reabre”, en *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, 49, 2015, pp. 157-158.

⁹³ Cfr. DE LA ROSA GUTIÉRREZ, G., “Imputabilidad y edad penal”, cit., pp. 12-13.

⁹⁴ Cfr. CANO PAÑOS, M. A., “¿Supresión, mantenimiento o reformulación del pensamiento educativo en el Derecho Penal juvenil?, cit., p. 3.

⁹⁵ Vid. Exposición de Motivos II.6.

carácter preventivo-especial imponiendo medidas “orientadas hacia la efectiva reinserción y el superior interés del menor”⁹⁶. Ello quiere decir que, dicha norma regula un proceso penal, pero con importantes especialidades, tratando de adaptarlo a los menores de 18 años, alejándose de los principios inspiradores del proceso penal de adultos⁹⁷. Además, las medidas que dispone tienen carácter sancionador-educativo al tratarse de consecuencias jurídicas con naturaleza de penas, pues constituyen reacciones penales a un hecho delictivo, pero con objetivos educativos y de reinserción social⁹⁸.

En este sentido, a partir de lo dispuesto en el art. 5 LORRPM, los menores se consideran en principio sujetos imputables y responsables, siempre que no concurra alguna de las causas de exención de la responsabilidad del art. 20 CP, no pudiendo ser sancionados en supuestos en los que un adulto no lo sería. Por tanto, la Ley parte de que, en general, a partir de los 14 años cualquier persona ha adquirido ya la capacidad para comprender lo ilícito. No obstante, el hecho de que se hallen en un periodo de formación de la personalidad explica que la responsabilidad tenga un carácter especial ya que no había podido adquirir la maduración necesaria para interiorizar las normas. En estas condiciones, un tratamiento penal y retribucionista sería una reacción injusta e incoherente con los principios constitucionales y con las normas internacionales. Por ello, la reacción social no debía ser de castigo, sino más bien de medidas educadoras⁹⁹.

En cuanto a las circunstancias atenuantes, la LORRPM no ha recogido expresamente la posibilidad de aplicar las del CP, como sí lo ha hecho con las eximentes. Ante esto, y pese a que la Ley tiene sus propias reglas, en caso de tratarse de una analogía pro-reo y teniendo en cuenta la supletoriedad del Derecho Penal común que se dispone en la Disposición Final Primera, nada impide aplicar las atenuantes del art. 21 CP. Por lo tanto, el Juez tendrá libertad en la apreciación de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal

⁹⁶ Vid. Exposición de Motivos I.5.

⁹⁷ Cfr. VENTAS SASTRE, R., *La Minoría de Edad Penal*, cit., p. 477.

⁹⁸ Cfr. BERNUZ BENEITEZ, M. J., “Justicia de menores española y nuevas tendencias penales. La regulación del núcleo duro de la delincuencia juvenil”, en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 07-12, 2005, pp. 4-5.

⁹⁹ Cfr. CANO PAÑOS, M. A., “¿Supresión, mantenimiento o reformulación del pensamiento educativo en el Derecho Penal juvenil?, cit., pp. 5-10.

al no existir una lista tasada, pero atendiendo siempre al interés superior del menor y a otras circunstancias personales, familiares y sociales¹⁰⁰.

Ante todo, merece atención el principio del interés superior del menor que es el más importante y que prima sobre el resto, siendo de esta forma como lo ha establecido la Convención sobre los Derechos del Niño¹⁰¹ en su art. 3.1 y la CE en el art. 10.2 disponiendo que todas las instituciones jurídicas debían atender, primordialmente, al interés superior del menor y la LORRPM. Esto quiere decir que todas las cuestiones que se susciten en este concreto ámbito han de resolverse buscando lo más conveniente para el menor. Todo ello, consigue apartar la naturaleza jurídica del sistema de justicia juvenil de la de adultos, en el que priman los elementos retributivos y de prevención general¹⁰².

La LORRPM también ha introducido en su art. 19 la posibilidad de que el Ministerio Fiscal sobresea el caso por conciliación o reparación del daño causado atendiendo a la gravedad y circunstancias del hecho y del menor. Además, el art. 27.3 permite ejercitar una actividad reparadora, de conciliación o de mediación con la víctima. Por lo tanto, este principio da la posibilidad de hacer uso del mecanismo de la desjudicialización, permitiendo alejar al menor de la Justicia penal, con el fin de evitar los efectos del proceso y cumpliendo el objetivo de la Ley por tener un alto contenido educativo¹⁰³.

Y, por último, el principio de intervención mínima acudiendo a otras vías para lograr la efectiva reinserción del menor; el principio de publicidad restringida, que vela por el derecho del menor a su intimidad, a su propia imagen y a su honor; y el principio de prohibición de exceso o proporcionalidad que aparece en el art. 8.2 delimitando la duración de ciertas medidas privativas de libertad¹⁰⁴.

¹⁰⁰ Cfr. CÁMARA ARROYO, S., "Imputabilidad e inimputabilidad penal del menor de edad. Interpretaciones dogmáticas del artículo 19 CP y tipologías de delincuentes juveniles conforme a su responsabilidad criminal", en *ADPCP*, vol. LXVII, 2014, pp. 290 y 292-293.

¹⁰¹ Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, (Disponible en: <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx>; última consulta: octubre 2017).

¹⁰² Cfr. CANO PAÑOS, M. A., "¿Supresión, mantenimiento o reformulación del pensamiento educativo en el Derecho Penal juvenil?", cit., pp. 17-20.

¹⁰³ La Recomendación número (87) 20, de 17 de septiembre de 1987, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, sobre Reacciones sociales ante la delincuencia juvenil, en su Regla II recomienda: "Alentar el desarrollo de procedimientos de desjudicialización y de mediación (...) a fin de evitar a los menores la asunción por el sistema de Justicia penal y las consecuencias derivadas de ello".

¹⁰⁴ Cfr. VENTAS SASTRE, R., *La Minoría de Edad Penal*, cit., pp. 484-492.

Por lo tanto, el CP de 1995, elevó la edad penal de los 16 a los 18 años y cinco años después, el legislador español promulgó la LORRPM, que supuso la adopción de un modelo educativo-sancionador para responder a los delitos cometidos por los mayores de 14 y menores de 18 años. Esta regulación era específica de los menores y separada del régimen penal de adultos dándole a los castigos un carácter educativo y resocializador (art. 55 LORRPM), con el fin de minimizar el riesgo de la intervención penal de los menores en los procesos y atendiendo, en todo momento, al interés superior del menor para garantizar la continuidad de su desarrollo libre y autónomo como persona¹⁰⁵.

En el siguiente apartado se va a hacer un análisis más concreto de cada uno de los tramos de edad a los que se refiere la aplicación de la LORRPM en cuanto al ámbito subjetivo y también al ámbito objetivo.

3.1.1. *Ámbito subjetivo*

El art. 1 de la LORRPM establece que esta Ley se aplicará para exigir la responsabilidad de los mayores de 14 años y menores de 18 por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas¹⁰⁶ en el CP o las Leyes penales especiales, a los que se refiere como “menores”. También regula que podía aplicarse, según el art. 1.2, a los mayores de 18 y menores de 21, en los términos establecidos en el art. 4, a los que denomina “jóvenes”, pero como veremos más adelante, esto no tuvo lugar. Sin embargo, parece que deja fuera de este régimen a los menores de 14 años, considerándolos irresponsables penalmente¹⁰⁷.

La falta o escasa madurez de los menores les excluye de la responsabilidad penal, impidiendo que sean objeto de un procedimiento penal, pues carecen de la madurez, que es el requisito básico de la imputabilidad. Por lo tanto, en los hechos delictivos cometidos por menores faltaría la culpabilidad.

¹⁰⁵ Cfr. CRUZ MÁRQUEZ, B., “Presupuestos de la responsabilidad penal del menor: una necesaria revisión desde la perspectiva adolescente”, en *AFDUAM*, 15, 2011, pp. 242-245.

¹⁰⁶ Cuando se elaboró la LORRPM, el CP de 1995 regulaba tanto delitos como faltas, sin embargo, actualmente, las faltas han desaparecido, desde el 1 de julio de 2015, existiendo únicamente delitos con la reforma de CP mediante Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, pero la LORRPM no se ha reformado para eliminar toda referencia a las faltas.

¹⁰⁷ Cfr. VENTAS SASTRE, R., *La Minoría de Edad Penal*, cit., pp. 493-496.

El actual concepto de imputabilidad penal no se funda tanto en la conexión psicológica entre hecho y autor, sino en la situación psíquica en que se encuentra el autor. Por lo tanto, son requisitos de la imputabilidad penal:

1. La capacidad intelectual y volitiva (concepto psicológico de culpabilidad) que ha sido sustituida por la capacidad de comprensión de la antijuridicidad y de actuar conforme a la misma (concepción formal o normativo de la culpabilidad).

2. La capacidad de actuar libremente.

3. La normalidad bio-psíquica o ausencia de anomalías que impidan la comprensión del hecho o actuar en conformidad (ausencia de eximentes de responsabilidad del art. 20 CP).

4. Cierta grado de madurez psico-física.

5. La capacidad de entender y ser motivado por la norma penal, la cual no debe limitarse a un mero conocimiento de la ilicitud del hecho o contrariedad al Derecho, sino en una capacidad valorativa del sujeto.

Además, el desarrollo de la personalidad es un proceso continuo y que depende de cada persona, que no se alcanza en un momento exacto y que está determinado por diversos factores (biológicos, psicológicos, sociales, etc), siendo necesario realizar un estudio individual. Pese a ello, lo que sí está claro es que la imputabilidad penal del menor deberá atender a las circunstancias personales del mismo y a la gravedad del hecho, siendo estrictamente necesario que la medida sancionadora-educativa se adecue también a su personalidad¹⁰⁸.

Como hemos dicho al principio de este apartado, la LORRPM distingue tres estadios de edades a los que imputa la responsabilidad de diferente modo:

3.1.1.1. Régimen de los menores de 14 años

La LORRPM regula en su art. 3 el “régimen de los menores de catorce años”, en el que señala que, cuando el autor de los hechos ilícitos sea un menor de 14

¹⁰⁸ Cfr. CÁMARA ARROYO, S., “Imputabilidad e inimputabilidad penal del menor de edad. Interpretaciones dogmáticas del artículo 19 CP y tipologías de delinquentes juveniles conforme a su responsabilidad criminal”, cit., pp. 250-253.

años, no se le exigirá ningún tipo de responsabilidad con arreglo a esta Ley, sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes. Con esto, se llega a la conclusión de que es este precepto, y no el art. 19 CP, el que establece el límite de la minoría de edad como causa de inimputabilidad. Los menores de 14 años serán totalmente inimputables y, por ello, exentos de cualquier tipo de responsabilidad penal¹⁰⁹.

Es decir, se aplica un criterio biológico-cronológico a la hora de exigir responsabilidad penal a los menores, una presunción iuris et de iure de la inimputabilidad. Por lo tanto, se dan dos situaciones según la edad donde la acción realizada será típica y antijurídica, pero no podrá ser culpable y punible penalmente el menor de 14 años, pero sí el mayor de dicha edad si no concurren circunstancias eximentes¹¹⁰.

Si bien es cierto que las ciencias de la psicología y la psiquiatría no pueden afirmar tajantemente cuándo las capacidades de comprensión y dirección de una persona se encuentran plenamente desarrolladas, se entienden, los 14 años, como el límite mínimo adecuado según acuerdos transaccionales o políticos¹¹¹. Dicha determinación no es la respuesta a conductas delictivas cometidas por menores, sino que tiene su base en considerar inadecuado que, por debajo de esa edad, los menores entren en contacto con las instancias judiciales y sufran las incidencias de un proceso. Así lo ha hecho constar la Exposición de Motivos de la LORRPM que justifica la fijación del límite en 14 años “con base en la convicción de que las infracciones cometidas por los niños menores de esta edad son en general irrelevantes y que, en los escasos supuestos en que aquéllas pueden producir alarma social, son suficientes para darles una respuesta igualmente adecuada los ámbitos familiar y asistencial civil, sin necesidad de la intervención del aparato judicial sancionador del Estado”¹¹².

¹⁰⁹ Cfr. DE LA ROSA GUTIÉRREZ, G., “Imputabilidad y edad penal”, cit., pp. 18-19.

¹¹⁰ Cfr. VIANA BALLESTER, C., “La responsabilidad penal del menor: naturaleza y principios informadores”, cit., pp. 173.

¹¹¹ Que la instauración del límite mínimo de edad se base en criterios políticos, ha sido señalado en un reciente debate en las jornadas de Jueces de Menores celebradas en el CGPJ, en las cuales se llegó a la conclusión de que el límite inferior era una cuestión de política-criminal y no del grado de madurez del menor.

¹¹² Vid. Exposición de Motivos I.4.

Parece que los 14 años pueden considerarse una edad demasiado temprana para que un menor deba responder por la comisión de un delito, sin embargo, hay que tener en cuenta que este límite sólo determina la aplicación del tratamiento penal específico¹¹³. Por lo tanto, a los menores de 14 años no se les exigirá responsabilidad conforme a la LORRPM ni conforme a ninguna otra ley penal¹¹⁴. Sin embargo, sí se les aplicarán las normas de protección de menores del Código Civil y demás disposiciones vigentes, declarándose la plena responsabilidad y considerándoseles imputables civilmente, con independencia de la madurez mental.

Esta remisión se entiende correcta ya que los delitos cometidos por menores suelen ser irrelevantes considerando suficiente imponerles una adecuada respuesta educativa basada en el ámbito familiar y de asistencia civil, pero en ningún caso una acción represiva, sancionadora o penal. El menor de 14 años no podrá sufrir reproche penal alguno, sino una serie de medidas de protección a cargo de la entidad pública¹¹⁵. Esta posibilidad de aplicar alguna respuesta de este tipo no es general, pues la competencia en materia de protección está en manos de las Comunidades Autónomas y no existe una regulación uniforme, lo que provoca una gran diversidad de actuaciones¹¹⁶.

3.1.1.2. Régimen de los menores de 14 a 18 años

En segundo lugar, el art. 1.1 LORRPM dispone que dicha norma se aplicará para exigir la responsabilidad de los mayores de 14 y menores de 18 años. El régimen de responsabilidad para estas edades se encuentra en el art. 5.1. Considera que los mismos serán responsables con arreglo a esta Ley cuando hayan cometido los delitos contenidos en el art. 1 y no concurra ninguna causa de exención de la responsabilidad criminal previstas en el CP.

¹¹³ Cfr. VENTAS SASTRE, R., *La Minoría de Edad Penal*, cit., pp. 496-501.

¹¹⁴ Vid. Artículos 1.1 y 3.

¹¹⁵ Cfr. JIMÉNEZ DÍAZ, M. J., "Algunas reflexiones sobre la responsabilidad penal de los menores", cit., pp. 12-17.

¹¹⁶ Cfr. CRUZ MÁRQUEZ, B., "Presupuestos de la responsabilidad penal del menor: una necesaria revisión desde la perspectiva adolescente", cit., p. 254.

En cuanto a este tramo de edad, cabe precisar que, si los 18 años marcan el fin de la adolescencia y el comienzo de la juventud, lo que suele faltar a esta edad no es la inteligencia, que ya está desarrollada, sino el carácter y la voluntad, en definitiva, la madurez personal¹¹⁷. Pese a ello, parece que la inclusión de los menores de estas edades en el ámbito de la LORRPM se debe a que les consideran capaces de comprender la ilicitud del hecho y de actuar conforme a esa comprensión, y, por ello, se les determina la imposición de medidas de naturaleza penal para evitar la comisión de futuros delitos¹¹⁸.

En definitiva, los menores de entre 14 y 18 años sometidos a la LORRPM son considerados plenamente imputables, y no de forma atenuada, sino que la responsabilidad penal tendrá una forma especial y peculiar, diferente a la del CP. Algunos entienden que no existe una presunción *iuris tantum* ni *iuris et de iure*, que declare una irresponsabilidad absoluta, sino tan solo existe una presunción de responsabilidad, pues el art. 19 CP no exime a los menores de toda responsabilidad, sino que deriva la responsabilidad penal a la exigida por la LORRPM. De este modo, se traslada la cuestión de la imputabilidad a las reglas del concepto de culpabilidad (capacidad para comprender el ilícito y actuar conforme a dicha comprensión), y no a la tesis del discernimiento¹¹⁹.

Si para el menor de 14 años el fundamento de su irresponsabilidad es la inimputabilidad, para los mayores de 14 años y menores de 18 son criterios de política criminal los que permiten que, aun siendo imputables, se les aparte del CP creando para ellos un sistema penal especial. Por ello, serán imputables y culpables pero las medidas que se les impondrán no se fundamentan en la culpabilidad sino en razones de política criminal que consideran más adecuado sustituir la pena por una intervención sancionadora-educativa.

Puede ocurrir que en muchas ocasiones se den supuestos especiales por encontrarse el menor en una edad cercana a los 18 años. Está claro que los menores de edades más alejados a dicha franja tendrán, por lo general, una madurez mental inferior a la del menor que se acerca al límite superior de dicha

¹¹⁷ Cfr. VENTAS SASTRE, R., *La Minoría de Edad Penal*, cit., pp. 501-503.

¹¹⁸ Cfr. CÁMARA ARROYO, S., "Imputabilidad e inimputabilidad penal del menor de edad. Interpretaciones dogmáticas del artículo 19 CP y tipologías de delincuentes juveniles conforme a su responsabilidad criminal", cit., pp. 267-268.

¹¹⁹ Ibid., cit., pp. 278-279.

franja. Esto ha sido tenido en cuenta por la LORRPM y ha establecido diferencias en la previsión de las medidas del art. 7 atendiendo a su duración, dependiendo de si se trata de menores de entre 14 y 16 años o de entre 16 y 18 años¹²⁰.

Respecto a estos dos tramos de edad¹²¹, la norma señala un tratamiento específico en lo referido a la aplicación prescriptiva del internamiento en régimen cerrado, así como el régimen agravado de duración de las medidas. En la actualidad, esta distinción puede interpretarse como la única manifestación legal del criterio del grado de madurez, una vez que se derogó definitivamente la posibilidad de aplicar la LORRPM a los mayores de 18 y menores de 21¹²².

3.1.1.3. Régimen de los mayores de 18 y menores de 21 años

En cuanto a este último tramo de edad, su antiguo art. 4 LORRPM permitía aplicar esta Ley a los jóvenes mayores de 18 años y menores de 21, de conformidad con el art. 69 CP que hace una remisión a la Ley, cuando el Juez lo declarase oportuno. De esta forma se completaba el régimen establecido en el art. 19 CP a la hora de determinar la manera de exigir la correspondiente responsabilidad penal a una persona, en el caso de la comisión de un hecho delictivo, según la edad en el momento de la comisión del hecho.

El art. 4.2 señalaba que para que se pudiese aplicar dicho régimen especial o, mejor dicho, excepcional, deberían darse tres condiciones o requisitos:

1º. Que el hecho cometido fuera una falta o un delito menos grave sin violencia o intimidación en las personas, ni grave riesgo para la vida o la integridad física de las mismas, tipificados en el CP o Leyes penales especiales.

2º. Que el menor no hubiera sido condenado en sentencia firme por hechos delictivos cometidos una vez cumplidos los 18 años. No se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos o faltas imprudentes, ni los antecedentes cancelados o que debieron cancelar.

¹²⁰ Vid. Artículo 10.

¹²¹ Vid. Exposición de Motivos II.10.

¹²² Cfr. CRUZ MÁRQUEZ, B., "Presupuestos de la responsabilidad penal del menor: una necesaria revisión desde la perspectiva adolescente", cit., pp. 254-255.

3º. Que las circunstancias personales del imputado y su grado de madurez aconsejasen la aplicación de la LORRPM, sobre todo, si era recomendado por el Equipo Técnico.

Estas condiciones no tenían base en un criterio científico por lo que otorgaba un amplio margen de discrecionalidad al Juez, siendo éste quien debía decidir si aplicar a un joven de entre 18 y 21 años el régimen de la LORRPM, posibilitando la aplicación de un tratamiento penal más benévolo del que le correspondería.

Frente a ello, parece más correcto que los sujetos de estas edades quedaran sujetos, sin excepción, al CP, aunque reconociéndoles una responsabilidad atenuada y un régimen como el previsto en las normas recogidas en la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria y en el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario o bien aplicarles el procedimiento penal ordinario, pero con las especialidades del procedimiento de menores. Esto se funda en que, si se les aplicaría el régimen de menores, de alguna manera, se correría el riesgo de ampliar el comienzo de la mayoría de edad penal debido al arbitrio judicial. Por ello y por la ausencia de capacidad económica que hiciera viable dicho régimen, fue una reforma la que suspendió la entrada en vigor del art. 4 LORRPM, quedando los mayores de 18 años bajo la aplicación del CP siendo, por lo tanto, plenamente responsables por la comisión de delitos¹²³.

3.1.2. Ámbito objetivo

Por otro lado, desde un punto de vista objetivo, la exigencia de responsabilidad penal al mayor de 14 y menor de 18 está supeditada a la comisión de un hecho tipificado como delito o falta en el CP o en las leyes penales especiales, aunque, actualmente, solo por delitos, al encontrarse las faltas extinguidas, siempre que no concurra en ellos ninguna de las causas de exención de la responsabilidad criminal previstas en el CP, como así lo contempla el art. 1.1 LORRPM.

¹²³ Cfr. VENTAS SASTRE, R., *La Minoría de Edad Penal*, cit., pp. 503-510.

Se entiende que el Derecho Penal de menores es accesorio al de adultos, pero con matices específicos y cierta autonomía en el procedimiento y en las consecuencias jurídicas, contando con un sistema de determinación de medidas previstas para responder a los delitos cometidos por el menor. Por lo tanto, las conductas típicas a las que se aplica la LORRPM no son diferentes a las previstas en el CP para los mayores de 18 años¹²⁴.

Lo único que habrá que tener en cuenta cuando se cometa un delito es el computo de las edades respecto de la comisión del hecho delictivo. Para que un delito cometido por un menor sea enjuiciable por la LORRPM, el menor deberá tener entre 14 y 18 años, debiendo atender siempre al momento de la comisión de los hechos, sin que haber rebasado la edad antes de comenzar el procedimiento o durante su tramitación tenga relevancia (art. 5.3 LORRPM). Por lo tanto, se sigue el criterio de *tempus regit actum*, esto es, el de tomar en consideración la edad que el menor tenía en el momento de cometer el delito¹²⁵. El computo deberá hacerse “de momento a momento”, de manera que habrá que considerar el momento concreto del día en que se produjo el nacimiento de la persona, así como el momento concreto en el que se cometió el delito. En caso de desconocimiento de la hora del nacimiento, se deberá aplicar el principio “*in dubio pro reo*” y considerar que en el momento de los hechos aún no había cumplido el infractor la mayoría de edad.

En ciertas ocasiones también existen hechos delictivos, en los cuales se suscita un problema con la fijación del momento de comisión. Para ello, la Circular 1/2000, de la Fiscalía General del Estado¹²⁶, determinó unas pautas a seguir. Por ejemplo, para el caso de delito continuado habrá que atender a la edad del sujeto en el momento de la comisión de cada uno de los hechos delictivos, conociendo la jurisdicción de menores los delitos cometidos por un

¹²⁴ Cfr. CRUZ MÁRQUEZ, B., “Presupuestos de la responsabilidad penal del menor: una necesaria revisión desde la perspectiva adolescente”, cit., p. 256.

¹²⁵ Cfr. LUACES GUTIÉRREZ, A. I. y VÁZQUEZ GONZÁLEZ, C., “Justicia penal de menores en España. Aspectos sustantivos y procesales”, en *Curso de la Escuela de Práctica Jurídica de la UNED*, 2008, p. 4.

¹²⁶ Circular 1/2000, de 18 de diciembre, relativa a los criterios de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, por la que se regula la responsabilidad penal de los menores, (Disponible en: https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/CI01-2000.pdf?idFile=18748173-3639-468e-9595-1d4c1b7ba6d7; última consulta: octubre 2017).

menor cuando tuviera entre 14 y 18 años, y la jurisdicción ordinaria las infracciones cometidas una vez rebasadas dichas edades.

Por otro lado, si nos encontramos con un delito permanente, el sujeto no podrá ser enjuiciado por la jurisdicción de menores cuando hubiera rebasado la edad máxima antes de eliminarse la situación ilícita. Además, el enjuiciamiento del delito permanente por la jurisdicción ordinaria no podrá tener en consideración, a efectos de agravación de la responsabilidad, las conductas cometidas en momentos anteriores a alcanzar los 18 años.

Y, por último, cuando entre la acción y el resultado, el sujeto rebase la mayoría de edad, el criterio a seguir para determinar la jurisdicción a aplicar debe basarse en atender al momento de la acción u omisión ilícita y no al momento del resultado¹²⁷.

3.2. Reformas legislativas

La LORRPM ha supuesto la creación de un derecho exclusivo para menores, asumiendo unos principios y considerando al menor como un sujeto en proceso de formación por lo que la consecuencia del delito no puede equipararse a la de los adultos, sino que debe estar orientada a la educación y corrección del menor.

Como ya hemos dicho anteriormente, la Ley fue aprobada el 12 de enero de 2000, pero, sin embargo, no entró en vigor hasta el 13 de enero de 2001. De ella sorprende que incluso antes de su entrada en vigor fue modificada por dos Leyes aprobadas en diciembre de 2000, la Ley 7/2000 y la LO 9/2000. Estas reformas y las siguientes, son consecuencia de la opinión pública siendo ellas motivadas por la comisión de ciertos delitos extremadamente crueles por menores. Dichas modificaciones han ocasionado un abandono, hasta cierto punto, de los avances conseguidos en la materia y han aproximado el Derecho Penal de menores, cada vez más, al de adultos. Por ello, el sistema de justicia de menores transitó desde

¹²⁷ Cfr. DE LA ROSA GUTIÉRREZ, G., "Imputabilidad y edad penal", cit., pp. 30-31.

criterios preventivo-especiales, garantistas y de responsabilidad de la originaria LORRPM, a un modelo más represivo, acercándose al del CP¹²⁸.

3.2.1. Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre

La primera modificación de la LORRPM tuvo lugar, como bien se ha dicho, antes de su entrada en vigor a través de la LO 7/2000, de 22 de diciembre, teniendo su causa en el aumento de la delincuencia juvenil¹²⁹. Su objetivo era el endurecimiento de la respuesta por delincuencia de menores para responder al alarmismo social. Ello ha sido consecuencia de sucesos puntuales, pero especialmente graves (kale borroka, violencia callejera, ETA...), que han llevado a legislar a golpe de acontecimiento. De forma que, la sociedad veía calmada sus ansias de justicia, observando reacciones por parte del Gobierno¹³⁰.

Entre el conjunto de modificaciones introducidas, cabe destacar la ampliación de los períodos de internamiento en régimen cerrado inicialmente previstos en el art. 9 LORRPM. Así, antes de la reforma, el techo sancionador era de 5 años de internamiento cerrado, siendo complementado con una medida de libertad vigilada con asistencia educativa, hasta otros 5 años. Esta duración máxima estaba prevista para los mayores de 16 años, siempre y cuando se tratase de supuestos de extrema gravedad, es decir, delitos cometidos con violencia o intimidación en las personas o con grave riesgo para la vida o la integridad física.

La reforma, en la Disposición Adicional Cuarta, propició un endurecimiento de las consecuencias penales impuestas a los menores de 18 años por la comisión de delitos de homicidio (art. 138), asesinato (art. 139), agresiones sexuales (arts. 170-180), terrorismo (arts. 571-580) y aquellos que el CP castigue con pena de prisión igual o superior a 15 años, y limitó las medidas, restringiendo la discrecionalidad de los jueces para aplicarlas ya que deberá tener en cuenta las

¹²⁸ Cfr. JIMÉNEZ DÍAZ, M. J., “Algunas reflexiones sobre la responsabilidad penal de los menores”, cit., p. 5.

¹²⁹ Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en relación con los delitos de terrorismo, (Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-23659>; última consulta: agosto 2017).

¹³⁰ Cfr. CANO PAÑOS, M. A., “¿Supresión, mantenimiento o reformulación del pensamiento educativo en el Derecho Penal juvenil?, cit., pp. 22-24.

circunstancias, la gravedad del hecho y de la situación psicosocial del menor. De ello se desprende, la primacía de la finalidad retributiva y preventivo general, frente a la socializadora y preventivo especial del Derecho de menores¹³¹.

Esta Disposición elevó los límites superiores del internamiento en régimen cerrado, quebrando con el principio de flexibilidad, ya que el juez no podrá optar entre varias medidas, sino que tendría que imponer el internamiento en régimen cerrado. Cuando el delito cometido sea alguno de los mencionados, se ampliarán los períodos de internamiento cerrado a 8 años de internamiento, complementado sucesivamente con una de libertad vigilada, hasta un máximo de otros 5 años, para los menores de 16 y 17 años. Sin embargo, a los de 14 y 15 años se les impondrá una medida de internamiento cerrado de un máximo de 4 años, complementada por otra sucesiva de libertad vigilada de máximo 3 años más. A ello se sumó, para más dureza que, en estos supuestos, la medida no podrá modificarse, sustituirse o suspenderse, ya que únicamente podía beneficiarse de estas facultades cuando hubiera transcurrido, al menos, la mitad de la duración de la medida de internamiento.

Pero esta Disposición todavía era más dura para los delitos más graves y, por ello, imponía la medida de internamiento en régimen cerrado de 10 años para los menores de 16 y 17 años y de 5 años para los de 14 y 15 años, cuando fueren responsables de más de un delito, alguno de los cuales estuviese calificado como grave y sancionado con pena de prisión igual o superior a 15 años de los delitos de terrorismo comprendido entre los arts. 571 a 580 CP¹³². Además, en estos delitos de terrorismo, introduce la medida complementaria de inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre 4 y 15 años al de la medida de internamiento y que produce la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos sobre el que recayere, así como la incapacidad para obtener esos u otros honores, cargos o empleos públicos, y la de ser elegido para cargo público (art. 42).

¹³¹ Cfr. BERNUZ BENEITEZ, M. J., "Justicia de menores española y nuevas tendencias penales. La regulación del núcleo duro de la delincuencia juvenil", cit., p. 16.

¹³² Cfr. CANO PAÑOS, M. A., "¿Supresión, mantenimiento o reformulación del pensamiento educativo en el Derecho Penal juvenil?, cit., pp. 24-26.

Dicha reforma hace ver al menor como un sujeto peligroso y usa el aislamiento de larga duración para separarlo de la sociedad y garantizar la defensa social. Además, implanta penas a menores de edad inspiradas en principios que la LORRPM rechaza, olvidándose del interés superior del menor, de la educación y de la resocialización, primando la necesidad de reducir la alarma social y velando por la defensa de la sociedad. Abandonó el modelo originario de prevención especial y se optó por uno mixto, donde la delincuencia de pequeña y mediana gravedad es orientada por el fin de la prevención especial, pero, sin embargo, el núcleo duro de la delincuencia de menores (reincidentes y responsables de delitos muy graves) se acerca más a la prevención general. Por lo tanto, esta reforma quiebra con los principios de la Ley ya que responde a una política criminal basada en la finalidad de prevención general y trata de alejar del ámbito familiar al menor durante el internamiento, siendo ello contrario a la finalidad originaria de la Ley¹³³.

3.2.2. *Ley Orgánica 9/2000, de 22 de diciembre y Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre*

El mismo día en que se aprobó la ley anterior, el 22 de diciembre, también se aprobó la LO 9/2000¹³⁴ que suspendía la ejecución de la LORRPM por un plazo de 2 años, en lo que se refiere a infractores de entre 18 y 21 años, los enmarcados en el art. 69 CP y art. 4 LORRPM. Esto parece incoherente, pues en la misma fecha, mientras la LO 7/2000 restringía el ámbito del art. 4, la LO 9/2000 suspendía su aplicación durante 2 años¹³⁵.

La Disposición Transitoria Única establecía un aplazamiento de la aplicación de la legislación penal de menores a los jóvenes de entre 18 y 21 años, por un plazo de 2 años a partir de la entrada en vigor de la LORRPM, es decir, hasta el

¹³³ Cfr. VIDAL HERRERO, M. S., *Crítica al modelo de responsabilidad penal del menor en la ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores hacia un "modelo social de responsabilidad" del menor infractor*, cit., pp. 162-163.

¹³⁴ Ley Orgánica 9/2000, de 22 de diciembre, sobre medidas urgentes para la agilización de la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, (Disponible en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo9-2000.html; última consulta: agosto 2017).

¹³⁵ Cfr. JIMÉNEZ DÍAZ, M. J., "Algunas reflexiones sobre la responsabilidad penal de los menores", cit., p. 6.

13 de enero de 2003. Ello se justificaba en la insuficiencia de equipamientos humanos y materiales existentes para hacer frente al enjuiciamiento de estos jóvenes. Sin embargo, parece que lo que ocurría era que el legislador tenía un profundo miedo a someter a sujetos de dicha franja de edad, los cuales eran bastante conflictivos, a unas disposiciones más benévolas¹³⁶.

Por otro lado, el 10 de diciembre se elaboró la Ley Orgánica 9/2002, la cual no introdujo ninguna modificación en el texto de la LORRPM, únicamente incluyó en su Disposición Transitoria Única¹³⁷ una nueva suspensión de la posibilidad de juzgar a los jóvenes de entre 18 y 21 años de acuerdo con las disposiciones legales de la Ley. Además, esta reforma tuvo lugar antes de agotarse el aplazamiento de 2 años dispuestos por la LO 9/2000, volviendo a prorrogar dicha suspensión hasta el 1 de enero de 2007¹³⁸.

3.2.3. Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre

La LO 15/2003¹³⁹ se produjo en el marco de una importante reforma del CP 1995 y la Disposición Final Segunda modificó los arts. 8 y 25 LORRPM, que regulaban el principio acusatorio y la participación de la víctima en el proceso penal. Modificó las posibilidades de actuación en el proceso de los ofendidos, de sus padres, de sus herederos o de sus representantes legales. La LORRPM originaria optaba por una intervención limitada, confiriendo exclusivamente al Ministerio Fiscal el principio acusatorio, sin embargo, la reforma incorpora la acusación particular sin límites en su art. 5, equiparándolo al proceso de adultos.

Esta reforma ha sido criticada por volver a dar preferencia a criterios exclusivamente defensivos y represivos, por encima de los educativos y preventivo-especiales originarios de la LORRPM. Ello tiene causa en que la

¹³⁶ Cfr. CANO PAÑOS, M. A., “¿Supresión, mantenimiento o reformulación del pensamiento educativo en el Derecho Penal juvenil?, cit., p. 26.

¹³⁷ Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y del Código Civil, sobre sustracción de menores, (Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-24044>; última consulta: agosto 2017).

¹³⁸ Cfr. JIMÉNEZ DÍAZ, M. J., “Algunas reflexiones sobre la responsabilidad penal de los menores”, cit., pp. 6.

¹³⁹ Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, (Disponible en: <https://www.boe.es/boe/dias/2003/11/26/pdfs/A41842-41875.pdf>; última consulta: agosto 2017).

reforma permite a la acusación oponerse a procesos de protección que el Ministerio Fiscal considere adecuados para el fin educativo como pueden ser la conciliación, la mediación o el archivo y, además, permite que se viole la intimidad del menor y su familia. Ello apoya que la acusación particular no favorece el interés superior del menor, sino que parece que esta reforma interesaba más por el resarcimiento de la víctima¹⁴⁰.

Todo ello se encontraba en clara contradicción con los principios primitivos de la LORRPM y, esta reforma, supuso una ruptura definitiva con tal modelo originario, conllevando una quiebra importante con los principios sobre los que se asentaba el modelo de responsabilidad penal de los menores.

3.2.4. Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre

Finalmente, en 2006 se da la última reforma, la cual tiene mayor transcendencia que las anteriores por determinar unos efectos definitivos¹⁴¹. Dio un nuevo contenido al art. 4 que entró en vigor el 5 de febrero de 2007 y suprimió los apartados 2 y 4 del art. 1. Por lo tanto, esta reforma acabó con la posibilidad de aplicar la LORRPM a jóvenes de entre 18 y 21 años y por ello, había que hacer desaparecer la previsión que permitía aplicar la Ley a estos jóvenes¹⁴².

En definitiva, si conjugamos estas reformas, el art. 4 originario, cuyo ámbito se restringió con la LO 7/2000 y se suspendió, primero por la LO 9/2000 y después por la LO 9/2002, entró, finalmente, en vigor el 1 de enero de 2007, vigencia que solo duró hasta el 4 de febrero del mismo año, dado que el día 5 cambió completamente su redacción. Por lo tanto, el mismo debió aplicarse desde el 1 de enero hasta el 4 de febrero de 2007, pero a ello se opuso la Fiscalía General del Estado mediante la Instrucción nº 5/2006¹⁴³ por la principal razón de

¹⁴⁰ Cfr. CANO PAÑOS, M. A., “¿Supresión, mantenimiento o reformulación del pensamiento educativo en el Derecho Penal juvenil?, cit., pp. 27-28.

¹⁴¹ Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, (Disponible en: <http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/05/pdfs/A42700-42712.pdf>; última consulta: agosto 2017).

¹⁴² Cfr. JIMÉNEZ DÍAZ, M. J., “Algunas reflexiones sobre la responsabilidad penal de los menores”, cit., pp. 6-8.

¹⁴³ Instrucción nº 5/2006 sobre los efectos de la derogación del artículo 4 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, Prevista por Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, (Disponible en:

que su derogación mediante la LO 8/2006 excluía su aplicación en tanto en hechos anteriores como posteriores al 1 de enero de 2007.

Como consecuencia de la derogación del art. 4, también queda sin contenido el art. 69 CP, aunque, si bien es cierto, éste sigue intacto puesto que el legislador no se ha preocupado en derogarlo. Lo mismo ocurre con las faltas ya que el 1 de julio del 2015 desaparecieron del CP en virtud de la reforma de LO 1/2015, de 30 de marzo¹⁴⁴, lo que debería comportar una nueva reforma de la LORRPM suprimiendo la alusión a las mismas en ciertos preceptos¹⁴⁵.

Además, esta Ley amplió los supuestos a que se puede aplicar el internamiento en régimen cerrado. Solo cabía el delito con violencia o intimidación en las personas o actuado con grave riesgo para la vida o la integridad física de las mismas o para los delitos contemplados en la Disposición Adicional Cuarta. Sin embargo, con esta reforma se puede aplicar a cualquier delito castigado con pena grave, independientemente de si es de prisión o de cualquier otra naturaleza; también se podrá aplicar a cualquier delito menos grave en el que haya intervenido violencia, intimidación o grave riesgo para la vida o integridad de las personas, y, finalmente, se podrá aplicar a los restantes delitos menos graves si se ejecutan en grupo o en organizaciones (art. 9.2). Por todo ello, prácticamente abarca toda la delincuencia de menores excepto la mencionada en el art. 18 LORRPM, el cual prevé la posibilidad de que el Ministerio Fiscal desista de la incoación del expediente por delitos menos graves cometidos sin violencia o intimidación.

En cuanto al nuevo diseño de la medida de internamiento en régimen cerrado, el art. 10 LORRPM obliga al Juez a imponerla, en los casos anteriores del art. 9.2, por un tiempo máximo de 3 años para los menores de 14 y 15 años y de 6 años para los de 16 y 17 años, complementada, solo en éstos, con una libertad vigilada de hasta 5 años. Por otro lado, cuando se trate de delitos contenidos en los arts. 138, 139, 179, 180 y 571 a 580 CP, así como los que tengan una pena

https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/MN_Instruccion5_2006.pdf?idFile=912fc472-07b8-4116-bc8d-444706d8e918; última consulta: octubre 2017).

¹⁴⁴ Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, (Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3439; última consulta: septiembre 2017).

¹⁴⁵ Cfr. JIMÉNEZ DÍAZ, M. J., "Algunas reflexiones sobre la responsabilidad penal de los menores", cit., pp. 8-9.

de prisión igual o superior a 15 años, la duración del internamiento será de 5 años para los menores de 14 y 15 años y de 8 para los de 16 y 17, complementándose en ambos casos con otra medida de libertad vigilada de hasta un máximo de 3 o 5 años, respectivamente. Además, solo en el segundo caso podrá hacerse uso de las facultades de modificación, suspensión o sustitución de la medida cuando haya transcurrido la mitad de la duración del internamiento¹⁴⁶.

Por otro lado, suprime el principio de la medida única ya que el art. 7.4 LORRPM señala que el Juez podrá imponer al menor una o varias medidas con independencia de que se trate de uno o más hechos; sin embargo, no está permitido imponer a un menor en una misma resolución más de una medida de la misma clase. También obliga a que los menores al alcanzar los 18 años cumplan el internamiento en un centro penitenciario si la conducta de la persona internada no responde a los objetivos propuestos en la sentencia¹⁴⁷.

Recapitulando, parece asombroso como una Ley ha podido sufrir tantas reformas, incluso antes de su entrada en vigor. Ello pone de relieve la gran dificultad del problema que viene a regular, lo cual puede observarse ya en el largo periodo de *vacatio legis* que tuvo, de un año. Además, podemos observar como las reformas han producido un alejamiento de los principios y valores originarios de la LORRPM, así como de su principal finalidad que era el interés superior del menor y la reeducación, reinserción y corrección del menor. Así, de esta forma, el hecho de obligar al juez a imponer la medida de internamiento en régimen cerrado en determinado supuestos, sin atender a las circunstancias del menor, supone la vulneración del principio de flexibilidad. Por otro lado, también el aumento de la duración de estos internamientos quebranta el principio de proporcionalidad, el cual no permite que la medida aplicada a un menor sea más gravosa que si le implantaría a un adulto conforme al CP.

En definitiva, estas reformas que endurecen las sanciones a los menores velan por un sistema de seguridad ciudadana, intentando paliar la alarma social

¹⁴⁶ Cfr. CANO PAÑOS, M. A., “¿Supresión, mantenimiento o reformulación del pensamiento educativo en el Derecho Penal juvenil?, cit., pp. 29-32.

¹⁴⁷ Cfr. GARCÍA PÉREZ, O., “La reforma de 2006 del sistema español de justicia penal de menores”, en *Política Criminal*, 5, 2008, pp. 2-7.

y devolver a la sociedad la empatía con la eficacia de la Ley. El original modelo preventivo-especial-educativo se ha visto convertido en un modelo preventivo-general-seguridad ciudadana, por lo que, la LORRPM en lugar de progresar hacia un sistema de reinserción, retrocede a regulaciones más duras asemejándose a las pasadas e introduciendo criterios del Derecho Penal de adultos.

Por lo tanto, es el legislador quien viene a decir que ahora el interés superior del menor, aunque siendo un objetivo primordial, ya no puede ser el único, sino que debe atenderse a otros intereses constitucionales, como la protección de la sociedad y de la víctima. Además, considera que el interés superior del menor es perfectamente compatible con el objetivo de conseguir una mayor proporcionalidad entre la respuesta sancionadora y la gravedad del delito, fruto de ello es el endurecimiento de las medidas que ha tenido lugar de forma sucesiva con las reformas aprobadas¹⁴⁸.

3.3. Medidas como consecuencias a la responsabilidad penal del menor

Debido a la implantación de duras penas en tiempos pasados, España vio clara la necesidad de crear un sistema de penas o, más bien, medidas diferentes a las del CP, por lo tanto, alejadas del marco penitenciario de los adultos. Algunas de las nuevas medidas debían ser desarrolladas por entidades públicas de protección de menores, por entender, que el castigo penal que se les debía de dar por una infracción debía ser educativo. Sin embargo, ni siquiera en España se estableció un sistema fijo e invariable de medidas, sino que, como hemos visto en el apartado de las reformas, las medidas han ido endureciéndose con el acontecer de los sucesos.

La Exposición de Motivos de la LORRPM dispone que “la responsabilidad penal de los menores presenta frente a la de los adultos un carácter primordial de intervención educativa que trasciende a todos los aspectos de su regulación jurídica y que determina considerables diferencias entre el sentido y el

¹⁴⁸ Cfr. DOMÍNGUEZ MARTÍN, A., “Responsabilidad penal de los menores: derechos para todos”, en *Revista Lex Nova*, 2007, pp. 22-23.

procedimiento de las sanciones en uno y otro sector, sin perjuicio de las garantías comunes a todo justiciable”. De ello se deduce la necesidad de ofrecerles una respuesta penal diferente a la de los adultos, con un carácter educativo, tratando de evitar el contacto con instituciones judiciales y posibilitarles la reinserción social.

Cuando se hace alusión a estas medidas no se puede hablar de penas, ya que las penas son instrumentos sancionadores impuestos al infractor, teniendo en cuenta su culpabilidad y aplicando el principio de proporcionalidad entre la duración e intensidad y la gravedad del delito; y las medidas se imponen a sujetos inimputables, carentes de responsabilidad penal según el CP, pero que revelan una peligrosidad social y cuya finalidad no es el castigo, sino evitar que puedan cometer delitos futuros. Por lo tanto, las medidas se refieren a las consecuencias jurídicas de hechos delictivos cometidos por menores, pero que tienen una finalidad educadora y resocializadora y de prevención de futuras infracciones, y no tanto de represión. Pese a ello, las medidas se parecen a las penas en que el presupuesto es cometer un delito y la consecuencia es privar al infractor de determinados derechos, y son similares a las medidas de seguridad en que existe una imputabilidad diferente a la del adulto y su fin es la educación y prevención del menor, pero no la represión. Por lo tanto, la naturaleza jurídica de las medidas es controvertida o híbrida, ya que, siendo consecuencias de la infracción penal, ni son penas ni son simples medidas de seguridad¹⁴⁹.

Por lo tanto, el Derecho Penal de menores goza de su propio sistema de consecuencias jurídicas ya que, por su especialidad y autonomía respecto al marco punitivo de los adultos, no impone penas. Las medidas son las consecuencias que se aplicarán a los mayores de 14 y menores de 18 años cuando cometan un delito y sean responsables de acuerdo con la LORRPM. Además, habrá que tener en cuenta que deben distinguirse dos tramos de edad a la hora de aplicar las penas, por un lado, los menores con 14 y 15 años y, por el otro, los que cuenten con 16 y 17 años. Actualmente, es el art. 7 LORRPM el que regula las medidas actuales y las define de la siguiente forma.

¹⁴⁹ Cfr. GOMEZ HIDALGO, J. I., “Estudio de las medidas establecidas en la Ley Reguladora de Responsabilidad Penal de Menores”, (Disponible en: <http://www.icace.org/pdf/b04articulo01.pdf>; última consulta: octubre 2017), pp. 28 y 33-37.

Los Jueces de Menores pueden imponer la medida de internamiento diferenciado varios tipos. En primer lugar, el internamiento en régimen cerrado por el cual los menores residirán en el centro y desarrollarán en el mismo las actividades formativas; en segundo lugar, el internamiento en régimen semiabierto donde los menores residirán en el centro, pero podrán realizar fuera del mismo actividades formativas; en tercer lugar, el internamiento en régimen abierto que permitía a los menores llevar a cabo todas las actividades en los servicios normalizados del entorno pero pernoctando en el centro; y, por último, el internamiento terapéutico por el que se daba una atención educativa especializada o un tratamiento específico dirigido a personas con anomalías o alteraciones psíquicas, un estado de dependencia a sustancias, o una alteraciones en la percepción (art. 7.1.a), b), c) y d)). Estas medidas de internamiento constaran de dos periodos, el primero que se desarrollara en el centro, y, el segundo, en régimen de libertad vigilada (art. 7.2).

En cuanto a la duración de las medidas de internamiento en régimen cerrado, lo hemos adelantado al explicar la reforma de 2006, por lo cual ahora se va a comentar de un modo más sintetizado. El internamiento en régimen cerrado se deberá aplicar ante delitos graves, menos graves pero que se haya empleado violencia o intimidación o se haya generado grave riesgo para la vida o integridad física, o cuando los delitos se cometan en grupos o bandas, debiéndoseles de imponer el art. 10, el cual dispone que cuando sean cometidos por un menor de 14 y 15 años el internamiento podrá alcanzar los 3 años, mientras que, si tiene 16 y 17 será de 6 años. En este último supuesto, cuando el hecho revista extrema gravedad (reincidencia), el Juez deberá complementar el internamiento con una libertad vigilada de hasta de 5 años. Además, solo podrá modificar, suspender o sustituir la medida una vez que haya transcurrido el primer año de internamiento. Por otro lado, ante los delitos de los art. 138, 139, 179, 180 y 571 a 580 CP, o de cualquier otro delito con pena de prisión igual o superior a 15 años, si es un menor de 14 y 15 años, se le impondrá una medida de internamiento cerrado de hasta 5 años, complementada por libertad vigilada de hasta 3 años; pero si tuviere 16 y 17 años, la duración será de hasta 8 años, con otra de libertad vigilada de máximo 5 años. Además, en este caso sólo se podrá modificar, suspender o sustituir la medida, cuando haya transcurrido la mitad de la duración

de la misma. En cuanto a estos delitos, el art. 11.2 prevé que cuando se dé una pluralidad de alguno de ellos, la medida de internamiento en régimen cerrado podrá alcanzar 10 años para mayores de 16 años y 6 años para los menores de esa edad, sin perjuicio de la medida de libertad vigilada que les corresponde. Y, por último, cuando el delito sea alguno de los comprendidos en los art. 571 a 580 CP (terrorismo), el Juez también impondrá al menor una medida de inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre 4 y 15 años al de la duración de la medida de internamiento cerrado, atendiendo a la gravedad del delito, al número de los cometidos y a las circunstancias del menor (art. 10.3)¹⁵⁰.

Por otro lado, cabe destacar la medida del tratamiento ambulatorio que obligará a los menores a asistir a un centro con cierta periodicidad y seguir las pautas fijadas por el debido tratamiento terapéutico. También existe la medida de asistencia a un centro de día en el que realizar actividades, la medida de permanencia de fin de semana en el domicilio o en un centro, y la de libertad vigilada por la que se hace un seguimiento de la actividad del menor y de su asistencia a la escuela, al centro de formación profesional o al lugar de trabajo (art. 7.1.e), f), g) y h)).

La LORRPM también regula otro tipo de medidas en el art. 7.1.i), j), k), l), m), n) y ñ) como son la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con sus familiares u otras personas; la obligación de convivir con otra persona, familia o grupo educativo; la realización de trabajos en beneficio de la comunidad o tareas socio-educativas; la amonestación o reproche, la privación del permiso de conducir ciclomotores y vehículos a motor, o de caza, así como el derecho a obtenerlo; y, por último, la inhabilitación absoluta de todos los honores, empleos y cargos públicos¹⁵¹.

El art. 7.3 consagra el principio de flexibilidad, teniendo siempre en cuenta el interés del menor a la hora de imponer una medida. Determina que para la elección de la medida se deberá atender de modo flexible, no sólo a la prueba y valoración jurídica de los hechos, sino también a la edad, las circunstancias

¹⁵⁰ Cfr. FERNÁNDEZ MOLINA, E., "El internamiento de menores. Una mirada hacia la realidad de su aplicación en España", en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 14-18, 2012, pp.4-6.

¹⁵¹ Cfr. BECERRA, C., "Alternativas educativas ante la responsabilidad penal de los menores infractores", en *Jornades de Foment de la Investigació de la Universitat Jaume I*, 2007, pp. 8-10.

familiares y sociales, a la personalidad del menor y el interés superior de este. Pero esto es cuestionable desde el punto de vista que las reformas han impuesto la aplicación del internamiento en régimen cerrado para determinados casos impidiendo cualquier tipo de flexibilidad. Además, el párrafo 4 regula que se podrá imponer al menor una o varias medidas con independencia de que se trate de uno o más hechos, pero no se impondrá a un menor en una misma resolución más de una medida de la misma clase.

Además, el art. 13 permite que el Juez deje sin efecto la medida impuesta, reduzca su duración o la sustituya por otra, siempre atendiendo al interés del menor y habiendo, éste, recibido el suficiente reproche por su conducta. El art. 51 dispone que el Juez podrá sustituir las medidas por otras que se estimen más adecuadas, por tiempo igual o inferior al que reste para su cumplimiento, siempre que la nueva medida pudiera haberse impuesto inicialmente atendiendo a la infracción. Además, se podrá producir la conciliación del menor con la víctima, dejándose sin efecto la medida impuesta.

Sin embargo, este régimen de determinación de las medidas se encuentra limitado por prescripciones como el principio acusatorio que impide al juez imponer una medida más grave o duradera a la solicitada por el Ministerio Fiscal o por el acusador particular (art. 8.1); la prohibición de que las medidas privativas de libertad superen el tiempo que habría durado si se hubiese impuesto a un adulto (art. 8.1), la prohibición de aplicar la medida de internamiento cerrado cuando se trate de acciones u omisiones imprudentes (art. 9.4), la restricción de la aplicación del internamiento en régimen cerrado en determinados supuestos (art. 9.2) y el reconocimiento de las mismas causas de exclusión de la imputabilidad que en el derecho penal de adultos en cuyo caso únicamente es posible aplicar el internamiento terapéutico o el tratamiento ambulatorio (art. 5.2).

Respecto al conjunto de medidas del art. 7 LORRPM, han sido objeto de numerosas críticas por la doctrina, sobre todo es tachado de “fraude de etiquetas” ya que denomina “medidas” a las sanciones que contiene, cuando, realmente, solo algunas lo son. En este sentido, únicamente las medidas de internamiento terapéutico y el tratamiento ambulatorio pueden considerarse verdaderas medidas, puesto que el resto son auténticas reacciones punitivas. También el reproche al menor, frecuentemente usada, ha sido criticada por su

carácter represivo, y no resocializador, pues una reprimenda verbal, no tiene finalidad reeducadora. Por el contrario, ha sido aceptada, siempre que el Juez haga comprender al menor el daño causado a la víctima y se aplique juntamente con otra, incrementando su capacidad educacional.

En cuanto a las medidas de internamiento o cualquiera que suponga aislamiento o privación de libertad, parece recomendable aplicarlas respetando la proximidad entre el menor y su familia, ya que un alejamiento de esta o un aislamiento social en exceso podría provocar una situación de desarraigo en el menor, siendo ello contrario a los principios de rehabilitación y reinserción social.

Respecto a la previsión de que, en caso de alcanzar la mayoría de edad, el sujeto pasaría a centros penitenciarios, parece una medida que tira por la borda todos los logros conseguidos en cuanto a reeducación con el menor infractor. Quedarían anulados los resultados positivos que hasta entonces se hubieran alcanzado de cara a la reinserción si se traslada al, ya mayor de 18 años, a un centro penitenciario ordinario para que termine de cumplir la condena¹⁵².

Una vez más, podemos observar cómo el legislador, basándose en criterios político-criminales retributivos, ha optado en algunos casos por sustituir principios como el del interés superior del menor y el de reeducación y rehabilitación, por otros de naturaleza defensivo-social atendiendo a la alarma social. Además, este problema se ha visto incrementado por las carencias de infraestructuras, provocando una indisponibilidad de centros específicos en los que cumplir las medidas, impidiendo dar una reinserción adecuada.

Y, por último, otro de los problemas es que la ejecución de las medidas está atribuida a las entidades públicas de las Comunidades Autónomas, lo que puede provocar la aparición de regímenes jurídicos diferentes entre los distintos territorios. Por ello, deberán unirse para otorgar respuestas similares y evitar un ambiente de inseguridad jurídica. Además, dicha ejecución supone la necesidad de un importante presupuesto, siendo ello lo que en muchas ocasiones ha fallado, dificultando la creación de centros educativos o terapéuticos y la contratación de personal, derivando en un incumplimiento de la norma.

¹⁵² Cfr. CARMONA SALGADO, C., "Legislación penal de menores en los sistemas jurídicos peruano y español. Un estudio comparativo", cit., pp. 96-107.

CONCLUSIONES

El tratamiento jurídico de la minoría de edad penal ha tenido, desde las primeras recopilaciones, mucha relevancia, con el fin de aplicar un régimen jurídico más benévolo y diferente al de adultos. Con la evolución en dicha materia se ha tratado de conseguir la elaboración de un Derecho Penal específico para los menores de edad que atienda a una prevención especial y educativa de dichos sujetos, dejando al margen el fin de la prevención general y retribución que tiene el Derecho Penal de adultos.

Del análisis del contexto histórico-doctrinal de la legislación del menor infractor se concluye que la fijación de una edad con la cual se alcanza la suficiente madurez para entender la antijuridicidad de un acto penal y tener la voluntad de hacerlo, ha estado en constante evolución por decisiones de política criminal y psicológicas. De los escritos más antiguos no se desprende un tratamiento específico y concreto de la responsabilidad de los menores, sino que se les imponía el mismo régimen que a los adultos. Sin embargo, con el paso del tiempo han sido cada vez más comunes las disposiciones que trataban de dar un régimen más laxo a los menores, pero no se terminaba de crear una legislación detallada acerca de esta materia.

Son numerosas las legislaciones que hacían pequeñas referencias a la responsabilidad penal de los menores, y, como hemos dicho, iban modulando la determinación de la minoría de edad. De este modo, *Las XII Tablas*, *Las Partidas*, los fueros, algunas pragmáticas, entre otras, trataron de diferenciar al menor de los adultos en cuanto a la responsabilidad penal a la hora de declararlos imputables o inimputables y al aplicarles penas menos duras. Pese a ello, no ha sido hasta la entrada de la Codificación en España, cuando se ha tomado en serio este asunto y la elaboración de los CP del siglo XIX y XX han entrado a regular más a fondo, y sin cesión, la fijación de la edad en cuanto criterio para exigir la responsabilidad penal del menor. Como hemos visto, en los Códigos del siglo XIX se ha tenido en cuenta el criterio del discernimiento que disponía una determinada edad a partir de la cual el menor ya no era inimputable y, a partir de la cual, se tenía en cuenta si concurría o no discernimiento, si el menor había actuado en conocimiento de la ilicitud del acto. Por el contrario, los

del siglo XX, eliminaron el criterio del discernimiento para imponer el criterio biológico o cronológico puro, por el cual, fijando una edad se declaraba la responsabilidad o no de un menor, sin atender al grado de su madurez.

Tuvo lugar una larga evolución de dicha materia, sin embargo, ha sido el CP de 1995 el que fijó una minoría de edad que declarase la responsabilidad de un menor, considerada adecuada desde el punto de vista de la política criminal y adecuada a las ciencias psicológicas y sociales. Además, promovió la elaboración de una Ley específica, la cual tuvo lugar el 12 de enero de 2000 acerca de la responsabilidad penal del menor que regulara no solo la edad, sino también los aspectos procesales, sustantivos y ejecutivos.

Del CP parece desprenderse que ha elevado la edad penal a los 18 años, sin embargo, podemos interpretar que lo que realmente ha hecho es rebajar la edad penal a los 14, aplicando a los menores de 14 y 18 años la LORRPM adecuada a sus circunstancias y menos gravosa que la regulada para los adultos. Por lo tanto, el art. 19 CP dispuso que la edad a partir de la cual se es responsable penalmente según este CP son los 18 años, pero los menores de esa edad no estarán libres de responsabilidad, sino que responderán penalmente según la LORRPM. Por lo tanto, los menores de 14 años están libres de toda responsabilidad penal, siendo únicamente responsables por la vía civil; los sujetos de entre 14 y 18 años deberán responder penalmente por las disposiciones de la Ley y, por último, los mayores de 18 años serán imputables por la normativa del CP.

También hemos visto que el Derecho Penal de menores actualmente vigente se basa, no en la culpabilidad del sujeto infractor y ni en la punibilidad como necesidad de penarle por sus hechos, sino en la necesidad de educarle y velar por su reinserción mediante la aplicación de medidas. Este carácter del Derecho juvenil pretende dar garantías al menor en un procedimiento, haciendo prevalecer, en todo momento, el principio de interés superior del menor, considerando que la implicación del menor en un proceso, como si se tratase de un adulto, sería más perjudicial para el desarrollo de su personalidad que beneficioso para hacerle comprender el ilícito. Se trata de que, con la aplicación de las medidas, el menor reconozca y se responsabilice de sus propios errores, pero no sea castigado por ellos de una forma retributiva, sino que pueda

rehabilitarse adecuadamente, teniendo en cuenta su corta edad. Por lo tanto, el Derecho Penal del menor, en principio, mira por el interés de éste, una prevención y protección especial y un fin reeducador, y no por el interés de penalizar duramente la delincuencia juvenil siendo ello lo ansiado por la sociedad.

Con dicho fin, la LORRPM tenía la intención de elaborar una serie de medidas más benévolas para aplicar al menor infractor, las cuales se encontraba entre la de las penas reguladas en el CP y las meras medidas de seguridad. Además, implantó una serie de reglas para la aplicación y ejecución de éstas. Reguló los tipos de penas, la duración, la modificación, suspensión o sustitución, etc. De modo que, con esta regulación, se pretendía velar por una finalidad educativa y resocializadora, por una flexibilización en la adopción de las medidas y una proporcionalidad en función de las circunstancias del hecho y del menor. También ha regulado la conciliación y la reparación a la víctima como un modo de terminar el proceso y como una medida educativa y de responsabilización del menor con la víctima.

Sin embargo y pese a todo ello, hemos señalado que el problema fue que estas medidas provocaron cierta inseguridad jurídica y desconfianza de la sociedad hacia la LORRPM al ver que los menores también podían cometer graves delitos y no eran penados con castigos de la misma proporción que dicha delincuencia. Como consecuencia de ello, la Ley sufrió una serie de sucesivas reformas. La Ley fue aprobada el 12 de enero de 2000, pero no entró en vigor hasta el 13 de enero de 2001 e incluso antes de entrar en vigor fue modificada por la LO 7/2000 y la LO 9/2000. También, tuvieron lugar otras tres, por la LO 9/2002, LO 15/2003 y LO 8/2006. Todas estas reformas fueron consecuencia del creciente alarmismo social debido a una serie de actos de delincuencia juvenil aislados y se dedicaron a endurecer la Ley, implantando un régimen de medidas más restrictivo, con el fin de calmar el levantamiento de la sociedad contra la generosidad del Derecho Penal aplicado a los menores. Fruto de ello es la amplitud de delitos por los que se obliga al Juez a aplicar la medida de internamiento en régimen cerrado, así como la extensión de su duración, sin tener en cuenta que la LORRPM establecía, en un principio, dicha medida como excepcional. Las reformas, lo que han conseguido, y que ha sido fuertemente

criticado por la doctrina, es un abandono de los principios que la norma pretendía proteger en su origen, como son el superior interés del menor, la prevención especial y protección específica del menor, la finalidad reeducativa y de reinserción, etc. Como consecuencia de ello, la legislación sobre la responsabilidad penal de los menores ha terminado por aproximarse, cada vez más, al Derecho Penal de adultos, transformado un derecho preventivo-especial con garantías, a un modelo más represivo y retributivo ante la comisión de determinados delitos.

Todo ello hace pensar que realmente, la legislación actual sobre responsabilidad penal del menor se encuentra dividida en un doble sistema. Por una parte, se encuentra un sistema más preventivo-general y represivo ante la delincuencia de mayor gravedad cometida por menores de edad, considerando como tal los delitos de homicidio, asesinato, agresiones sexuales, terrorismo y los que sean castigados con una pena de prisión igual o superior a 15 años aunque como hemos visto los casos cada vez se han ampliado más, incluyendo también delitos graves, menos graves pero en los que se haya empleado violencia o intimidación o se haya generado grave riesgo para la vida o integridad física y los delitos cometidos en grupos o bandas; mientras que, por otra parte, se da un sistema más preventivo-especial y educativo ante el resto de los delitos de menor gravedad.

En definitiva, se trata de una materia muy poco estable en el pasado y que depende de muchos factores extrajudiciales que son difíciles de controlar por su continuo cambio, como los psicológicos. Por lo tanto, la actual LORRPM, tras sus 6 reformas, encuentra en su seno un sistema híbrido, que intenta compaginar la satisfacción de las necesidades generales de la sociedad con el respeto de los derechos y garantías individuales de los menores, no rompiendo radicalmente con los postulados originarios de la norma, pero sí viéndose influida por disposiciones que, en un principio, no encajaban en el Derecho Penal de menores.

Pese a este endurecimiento, la LORRPM ha supuesto la aparición, por primera vez en España, de un auténtico Derecho Penal específico de menores que hasta entonces no había sido regulado en un único texto destinado a dicha materia, sino que estos sujetos eran penados en las mismas condiciones que los

adultos. Además, esta norma incluye un derecho especial en el ámbito sustantivo, procesal y de ejecución, permitiendo, de esta forma, una mayor conexión de todo el texto, y la consecución de un tratamiento del menor más efectivo. La Ley reconoce a estos sujetos su imputabilidad, haciéndole responsable de sus propios actos, pero también le reconociéndole una serie de garantías mínimas legales y constitucionales, considerando al menor un sujeto con derechos y deberes, equiparándole, en este sentido, con el adulto. Todo ello ha permitido superar la anterior legislación tutelar y patriarcal que consideraba al menor un objeto, el cual era manejado por el padre de familia a su antojo, pudiendo aplicarle los castigos que creyera convenientes sin límite alguno, pasando a calificar al menor como un ser humano equiparado en derechos y garantías a los adultos, lo que tiene que interpretarse, a nuestro juicio como un hito jurídico.

BIBLIOGRAFÍA

- BECERRA, C., “Alternativas educativas ante la responsabilidad penal de los menores infractores”, en *Jornades de Foment de la Investigació de la Universitat Jaume I*, 2007.
- BERNUZ BENEITEZ, M. J., “Justicia de menores española y nuevas tendencias penales. La regulación del núcleo duro de la delincuencia juvenil”, en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 07-12, 2005.
- BLANCO BAREA, J.A., “Responsabilidad Penal del Menor: principios y medidas judiciales aplicables en el Derecho Penal español”, en *Revista de Estudios Jurídicos*, 8, 2008.
- CÁMARA ARROYO, S., *Derecho Penal de Menores y Centros de Internamiento. Una Perspectiva Penitenciaria*, Tesis defendida en la Universidad de Alcalá de Henares, 2011.
- CÁMARA ARROYO, S., “Imputabilidad e inimputabilidad penal del menor de edad. Interpretaciones dogmáticas del artículo 19 CP y tipologías de delincuentes juveniles conforme a su responsabilidad criminal”, en *ADPCP*, 67, 2014, pp. 240-320.
- CAMPOS SÁNCHEZ, M., “Incidencia del nuevo Código Penal en la legislación de menores”, en *Revista Jurídica de la Región de Murcia*, 24, 1997, pp. 97-108.
- CANO PAÑOS, M. A., “¿Supresión, mantenimiento o reformulación del pensamiento educativo en el Derecho Penal juvenil?, en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 13, 2011.
- CANTARERO, R., “Los menores y el Derecho Penal”, en *Derecho Privado y Constitución*, 7, 1995.
- CARMONA SALGADO, C., “Algunas observaciones sobre la responsabilidad penal de los menores, a raíz de la Ley 5/2000, de 12 de enero”, en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 45, 2002.

- CARMONA SALGADO, C., "Legislación penal de menores en los sistemas jurídicos peruano y español. Un estudio comparativo", en *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 4, 2010, pp. 82-119.
- COLÁS TURÉGANO, A., "Hacia una humanización de la justicia penal: la mediación en la justicia juvenil española. Principios y ámbito aplicativo en la LO 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores", en *Revista boliviana de derecho*, 20, 2015, pp. 142-167.
- CRUZ MÁRQUEZ, B., "Presupuestos de la responsabilidad penal del menor: una necesaria revisión desde la perspectiva adolescente", en *AFDUAM*, 15, 2011, pp. 241-269.
- DE LA ROSA GUTIÉRREZ, G., "Imputabilidad y edad penal", en *BuscaLegis*, 2007.
- DOMÍNGUEZ MARTÍN, A., "Responsabilidad penal de los menores: derechos para todos", en *Revista Lex Nova*, 2007, pp. 20-23.
- FERNÁNDEZ MOLINA, E., "El internamiento de menores. Una mirada hacia la realidad de su aplicación en España", en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 14-18, 2012.
- GARCÍA PÉREZ, O., "La reforma de 2006 del sistema español de justicia penal de menores", en *Política Criminal*, 5, 2008, pp. 1-31.
- GARCÍA VILLALUENGA, L., "Protección al menor en el nuevo Código Penal", en *Cuadernos de Trabajo Social*, 10, 1997, pp. 195-213.
- GOMEZ HIDALGO, J. I., "Estudio de las medidas establecidas en la Ley Reguladora de Responsabilidad Penal de Menores", (Disponible en: <http://www.icace.org/pdf/b04articulo01.pdf>; última consulta: octubre 2017).
- GRANADO PACHÓN, S.J., *El menor infractor: evolución jurídica y mitos del tratamiento jurídico-penal actual*, Tesis defendida en la Universidad de Huelva, 2016.
- JIMÉNEZ DÍAZ, M. J., "Algunas reflexiones sobre la responsabilidad penal de los menores", en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 17-19, 2015.

- JIMÉNEZ DÍAZ, M. J., "Menores y responsabilidad penal: el debate se reabre", en *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, 49, 2015, pp. 155-179.
- JIMÉNEZ LAINEZ, C., *Evolución legislativa de la responsabilidad penal del menor*, Trabajo fin de Grado de Derecho defendido en la Universidad de Publica de Navarra, 2014.
- LUACES GUTIÉRREZ, A. I. y VÁZQUEZ GONZÁLEZ, C., "Justicia penal de menores en España. Aspectos sustantivos y procesales", en *Curso de la Escuela de Práctica Jurídica de la UNED*, 2008.
- NIETO MORALES, C., MARTÍNEZ HERMOSA, A. M., y ESCANCIANO SÁNCHEZ, F., *Intervención con menores en conflicto con la ley*, Madrid, Dykinson, 2016.
- PANTOJA GARCÍA, F., "Unas notas sobre la imputabilidad de los menores y su tratamiento en la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores", en *AFDUAM*, 15, 2011, pp. 307-314.
- POZUELO PÉREZ, L., "El futuro del Derecho penal juvenil: de un Derecho penal de menores a un Derecho penal de adultos", en *InDret, Revista para el Análisis del Derecho*, 2009.
- SÁNCHEZ MARTÍNEZ, F., *La jurisdicción de menores en España (pasado, presente y futuro)*, Tesis defendida en la Universidad Complutense de Madrid, 1996.
- VENTAS SASTRE, R., *La Minoría de Edad Penal*, Tesis defendida en la Universidad Complutense de Madrid, 2002.
- VIANA BALLESTER, C., "La responsabilidad penal del menor: naturaleza y principios informadores", en *Revista Penal*, 13, 2004, pp. 151-184.
- VIDAL HERRERO, M. S., *Crítica al modelo de responsabilidad penal del menor en la ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores hacia un "modelo social de responsabilidad" del menor infractor*, Tesis defendida en la Universidad de Complutense de Madrid, 2015.

REFERENCIAS NORMATIVAS

a) Legislación actual

Código Penal de 1995: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, (Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444>; última consulta: septiembre 2017).

Constitución española de 1978, (Disponible en: <https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf>; última consulta: agosto 2017).

Instrucción nº 5/2006 sobre los efectos de la derogación del artículo 4 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, Prevista por Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, (Disponible en: https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/MN_Intrucc ion5_2006.pdf?idFile=912fc472-07b8-4116-bc8d-444706d8e918; última consulta: octubre 2017).

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, (Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3439; última consulta: septiembre 2017).

Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, (Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-641>; última consulta: agosto 2017).

Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en relación con los delitos de terrorismo, (Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-23659>; última consulta: agosto 2017).

Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, (Disponible en: <http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/05/pdfs/A42700-42712.pdf>; última consulta: agosto 2017).

Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, (Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-15648>; última consulta: agosto 2017).

Ley Orgánica 9/2000, de 22 de diciembre, sobre medidas urgentes para la agilización de la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, (Disponible en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo9-2000.html; última consulta: agosto 2017).

Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y del Código Civil, sobre sustracción de menores, (Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-24044>; última consulta: agosto 2017).

Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, (Disponible en: <https://www.boe.es/boe/dias/2003/11/26/pdfs/A41842-41875.pdf>; última consulta: agosto 2017).

b) Normativa histórica citada

Código de Hammurabi de 1750 a.C., (Disponible en: <http://www.ataun.net/BIBLIOTECAGRATUITA/CI%C3%A1sicos%20en%20Español/An%C3%B3nimo/C%C3%B3digo%20de%20Hammurabi.pdf>; última consulta: agosto 2017).

Código de las Costumbres escritas de Tortosa de 1919, (Disponible en: http://simurg.bibliotecas.csic.es/viewer/image/CSIC000348216_V03/4/#head; última consulta: agosto 2017).

Código Penal español de 1822, (Disponible en: <http://www.cienciaspenales.net/files/2016/03/codigoPenal1822.pdf>; última consulta: julio 2017).

Código Penal español de 1848, (Disponible en: <http://fama2.us.es/fde/codigoPenal1848.pdf>; última consulta: julio 2017).

Código Penal español de 1870 (Disponible en: https://sirio.ua.es/libros/BDerecho/codigo_penal/index.htm; última consulta: julio 2017).

Código Penal español de 1928 (Disponible en: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1928/257/A01450-01526.pdf>; última consulta: julio 2017).

Código Penal español de 1932, (Disponible en: <https://es.scribd.com/document/235086176/Codigo-penal-1932-pdf>; última consulta: julio 2017).

Código Penal español de 1944, (Disponible en: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1945/013/A00427-00472.pdf>; última consulta: julio 2017).

Código Penal español de 1973, (Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1973-1715>; última consulta: julio 2017).

Código Penal español 1980, (Disponible en: http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/codigo_penal_1980.htm; última consulta: julio 2017).

Constitución de Cádiz de 1812, (Disponible en: http://www.famp.es/famp/intranet/documentos/const_facsimil.pdf; última consulta: agosto 2017).

Constitución democrática española de 1869, (Disponible en: <http://www.cepc.gob.es/docs/constituciones-espa/1869.pdf?sfvrsn=4>; última consulta: agosto 2017).

Constitución española de 1876, (Disponible en: <http://www.cepc.gob.es/docs/constituciones-espa/1876.pdf?sfvrsn=4>; última consulta: agosto 2017).

Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, (Disponible en: <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx>; última consulta: octubre 2017).

Fuero Real de 1255, (Disponible en: <http://fama2.us.es/fde/opusculosLegalesT2.pdf>; última consulta: septiembre 2017).

Las Siete Partidas de Alfonso X, el Sabio, (Disponible en: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/las-siete-partidas-del-rey-don-alfonso-el-sabio-cotejadas-con-varios-codices-antiguos-por-la-real-academia-de-la-historia-tomo-3-partida-quarta-quinta-sexta-y-septima--0/html/01fb8a30-82b2-11df-acc7-002185ce6064_723.htm; última consulta: septiembre 2017).

Las XII Tablas del siglo V, (Disponibles en: http://ermoquisbert.tripod.com/dr/12t/12t_apunte.pdf; última consulta: septiembre 2017).

Ley de Tribunales Tutelares de Menores de 11 de junio de 1948, (Disponible en: https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-1986-10011300118; última consulta: octubre 2017).

Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la Ley reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores, (Disponible en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo4-1992.html; última consulta: agosto 2017).

Leyes Asirias Medias del siglo XII (Disponibles en: <https://www.unizar.es/hant/Fuentes/leyasiria.html>; última consulta: septiembre 2017).

Leyes de Toro de 1505, (Disponible en: http://faculty.georgetown.edu/sallesrv/courses/SPAN-459/span459/pdfs/leyes_toro/leyes_96.pdf; última consulta: septiembre 2017).

Ordenamiento de las Cortes de Alcalá de Henares de 1348, (Disponible en: <http://fama2.us.es/fde/ocr/2004/ordenamientoDeAlcala.pdf>; última consulta: septiembre 2017).

Ordenanzas del Consejo Real de Castilla de 1385-1490, (Disponible en: <http://institucional.us.es/revistas/historia/07/07%20de%20dios.pdf>; última consulta: septiembre 2017).